

9-9-2008

Violencias de género. Mujeres víctimas del conflicto armado y reparación integral, ley 975 de 2005

Janeth Amado Melo
Universidad de La Salle, Bogotá

Diana López Larrota
Universidad de La Salle, Bogotá

Andrea Molina Hernández
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social



Part of the [Social Work Commons](#)

Citación recomendada

Amado Melo, J., López Larrota, D., & Molina Hernández, A. (2008). Violencias de género. Mujeres víctimas del conflicto armado y reparación integral, ley 975 de 2005. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/32

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Departamento de Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Trabajo Social by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

VIOLENCIAS DE GÉNERO. MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO Y REPARACIÓN INTEGRAL, LEY 975 DE 2005.

JANETH AMADO MELO
DIANA LÓPEZ LARROTA
ANDREA MOLINA HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO
BOGOTÀ D.C.
2008

VIOLENCIAS DE GÉNERO. MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO Y REPARACIÓN INTEGRAL, LEY 975 DE 2005.

JANETH AMADO MELO
DIANA LÓPEZ LARROTA
ANDREA MOLINA HERNÁNDEZ

Trabajo de Grado para optar al título de Trabajadoras Sociales

Asesora
LUZ MARINA PAVA BARBOSA
Trabajadora Social

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO
BOGOTÁ D.C.
2008

NOTA DE ACEPTACIÓN

ROSA MARGARITA VARGAS DE ROA
Decana Facultad de Trabajo Social

ALBA LUCIA CRUZ CASTILLO
Jurado

MARTHA ROCIO VELASCO
Jurado

Bogotá D.C. 9 de Septiembre de 2008.

ADVERTENCIA

“Ni la universidad, ni el asesor, ni el jurado calificador (a) son responsables de las ideas expuestas por los graduandos”.

(Capítulo XII, Artículo 95 Reglamento Estudiantil 1996).

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Summary	
INTRODUCCIÓN	
1. ANTECEDENTES	12
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.2 JUSTIFICACIÓN	19
1.3 OBJETIVOS	20
1.3.1 General	20
1.3.2 Específicos	20
2. REFERENTES	21
2.1 REFERENTE TEÓRICO- CONCEPTUAL	21
2.1.1 Perspectiva de género	21
2.1.2 Derecho a la reparación integral	25
2.2 REFERENTE NORMATIVO	26
3. DISEÑO METODOLÓGICO	32
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	32
3.2 ENFOQUE	33
3.3 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN	33
3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN	34
3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN	35
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	40
3.7 FASES DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	42
4. RESULTADOS	46
4.1 MANIFESTACIONES DE VIOLENCIAS DE GÉNERO	46
4.1.1 Manifestaciones de violencia física	47
4.1.2 Manifestaciones de violencia sexual	52
4.1.3 Manifestaciones de violencia psicológica	55
4.2. DESARROLLO DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL	57
4.2.1 Acciones emprendidas por el Estado	58
4.2.2 Consideraciones institucionales y académicas	63
4.2.3 Significados de reparación integral	70
4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS	71

	Pág.
CONCLUSIONES	77
RECOMENDACIONES	80
APRENDIZAJES	81
BIBLIOGRAFÍA	83
ANEXOS	91
ABSTRACT	

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO A. Producción investigativa en Bogotá 2005-2007	91
ANEXO B. Revisión documental 2005 – 2007	95
ANEXO C. Principios del derecho a obtener reparación garantía de que no se repitan las violaciones	98
ANEXO D. Marco normativo internacional	100
ANEXO E. Marco normativo nacional	114
ANEXO F. Reseña analítica de violencia de género reparación integral (RAVGRI)	116
ANEXO G. Instructivo resumen analítico violencia de género y reparación integral (RAVGRI)	117
ANEXO H. Ficha temática violencia de género y reparación integral (FTVGRI)	119
ANEXO I. Instructivo ficha temática violencia de género y reparación integral (FTVGRI)	120
ANEXO J. Presupuesto	122
ANEXO K. Recolección de la información	123
ANEXO L. Matriz procesamiento y ordenamiento de la información	370

LISTA DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1. Fuentes Secundarias	34
Cuadro 2. Unidad de Trabajo Investigación Documental	36
Cuadro 3. Cuadro Categorical	43
Cuadro 4. Matriz procesamiento y ordenamiento de la información	44
Cuadro 5. Fases de la Investigación Documental	44

LISTA DE FIGURAS Y GRÁFICOS

	Pág.
Gráfico 1. Momentos de aprobación Ley 975 de 2005	28
Gráfico 2. Características del contexto político	29
Gráfico 3. Proceso legislativo 2005	30
Gráfico 4. Unidad de trabajo según año de publicación	40
Gráfico 5. Autores de la producción escrita	41

DEDICATORIA

La culminación de esta etapa de mi vida la dedico

Al dador de la vida, que ha guiado mi camino. A ti Jesucristo, que a través del Espíritu Santo, y amor transformador me has brindado años de gracia y bendición.

A mi esposo, a quien desde estas palabras quiero decirte que te amo, que eres el regalo más tierno y hermoso que he podido recibir y hoy te expreso mis agradecimientos y te digo gracias por tu amor, paciencia ternura, por tus oraciones, abrazos y palabras en aquellos momentos en los cuales no le encontraba sentido a las situaciones que vivía, pero también en los días de felicidad. Gracias por contribuir en fortalecer mi vida a pesar de que las circunstancias parecían derribarme. Te amo esposo y cada día le doy gracias a Dios por permitirme compartir mi vida contigo.

A mi equipo de trabajo, de quienes he recibido su hermosa amistad, así como grandes enseñanzas de amor, las admiro pues han buscado sembrar con excelencia en este largo camino y así cumplir con el principio de ser fieles en aquello que era pequeño, para que luego sean puestas en lugares de honra. Gracias.

A todas aquellas personas que a partir de su enseñanza, testimonio, ejemplo, amistad confianza, apoyo e innumerables atributos, permitieron enriquecer mi área personal y obtener fundamentos en lo profesional. Gracias.

Janeth Amado Melo

Al terminar este proceso formación profesional es ineludible reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que a cada uno de sus hijos le brinda paz, fortaleza, fe y los más bellos dones para que cada uno los desarrolle; gracias Señor por la familia que quisiste me cobijara, educara y acompañara mi vida; gracias Señor por guiar mi destino y hacer que en él me encontrará en los momentos precisos con personas tan maravillosas como mis docentes y compañeras de trabajo que con su perspectiva de vida aportaron diariamente a consolidar la mía.

A mi familia, por su constante apoyo, comprensión y solidaridad que han hecho entender que todo aquello que se piensa imposible se logra con la unidad familiar y apoyo en Dios.

A mi Madre, que con el amor permanente a sus hijos con su incondicionalidad, esfuerzo y grandeza ha facilitado todos los momentos de mi vida;

A mi Padre, que con su trabajo honesto ha brindado a nuestra familia estabilidad y seguridad, y que nunca ha renunciado a ver sus hijos siempre en mejores condiciones.

A Eduardo, por ser mi compañero fiel en toda mi vida, me ha hecho sentir que siempre estaré acompañada de su buen humor y descomplique.

A Camilo, el amor mío de mi vida, por su amor y horas enteras de escucha, comprensión y crítica constante.

Diana López Larrota

Dedico este trabajo de grado al Señor Jesucristo, por darme sabiduría para lograr materializar los objetivos propuestos en el proceso de formación académica y profesional, por darme fortaleza y perseverancia en todos los momentos difíciles que se presentaron a nivel personal y familiar, a mis padres quienes me dieron la vida, me educaron y formaron con principios y valores éticos y morales, a ellos mil gracias por su cariño, comprensión y apoyo incondicional.

A mis hermanos; Miguel, quien me acompañó y compartió conmigo triunfos y fracasos, dedico su tiempo a enseñarme que en la vida es importante perseverar para alcanzar las metas y objetivos propuestos.

Alexander quien con su nobleza me enseñó aprender a valorar las cosas buenas y malas que se presentan en el transcurrir de los días y que cada cosa que se vive deja un aprendizaje significativo para la vida.

Fredy con quien no pude compartir mucho tiempo pero de corazón me enseñó a querer y a valorar las cosas cuando no se tienen cerca.

A todos ellos mil gracias por estar a mi lado acompañándome, guiándome y brindándome su cariño, amor, comprensión, apoyo emocional y económico en el transcurso de la carrera.

A mi Angelito, quien me ha acompañado en estos últimos años de mi vida, a él mil gracias por su amor sincero y comprensivo. Te quiero

Andrea Priscila Molina Hernández

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Señor Jesucristo por brindarnos esperanza y fortaleza en el proceso de formación profesional, a nuestras familias quienes confiaron en nuestras competencias y brindaron apoyo y comprensión incondicional; a los docentes que transmitieron con dedicación sus conocimientos no sólo conceptuales sino éticos y morales.

Al personal administrativo especialmente a las áreas de biblioteca y audiovisuales por la colaboración, apoyo y prestación de servicios según nuestros requerimientos. Y a cada una de las personas que contribuyeron directa e indirectamente en nuestra formación profesional.

“A todas aquellas mujeres víctimas del conflicto armado Colombiano, que aunque no se tuvo la oportunidad de establecer una interacción con ellas y observar su rostro; enseñan valiosas lecciones de vida y contribuyen a que se tenga memoria de los hechos que en Colombia destruyen la democracia.

Es así que en el desarrollo de la investigación los testimonios de las mujeres fueron elementos importantes para partir de una realidad y considerarlas como mujeres valientes que a pesar de las humillaciones públicas, se arriesgan a exponer ante los demás, aquellas experiencias dolorosas que destruyen sus vidas, y que sin embargo tienen la esperanza de construir un futuro en el cual sean dignificadas como seres humanos”.

Equipo investigador

INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones de violencia de género en el marco del conflicto armado como práctica de guerra cometida hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, se convierte en una de las condiciones que agudiza el estado integral de las mujeres colombianas, dado que representa un grave vulneración a los derechos humanos y una pobre garantía de éstos por parte del Estado, que de acuerdo a la jurisprudencia internacional debe diseñar los mecanismos internos necesarios para garantizar a las víctimas del conflicto armado el derecho a la reparación integral a daños causados en este marco, los cuales deben ser proporcionales a la manifestación de violencia cometida.

La presente investigación, se constituye en un reto por explorar desde Trabajo Social una temática de actualidad, con énfasis jurídico y relevancia social, dado que la situación de la mujer colombiana puede reivindicarse, una vez se planteen leyes con perspectiva de género.

El documento se estructura en cuatro partes, la primera comprende la delimitación del problema, compuesto por antecedentes de la temática, planteamiento del problema, justificación y objetivos. La segunda parte desarrolla el referente teórico fundamentado en los aportes conceptuales de autores como: Joan Scott, Mara Viveros Vigoya, Donny Meertens, Amani El Jack y Louis Joinet; también el referente normativo consolidado a partir del contribución de Van Hissenhoven además de la normatividad internacional y nacional; la tercera parte se refiere al diseño metodológico, el cual comprende: tipo y fases de investigación, fuentes de información, técnicas e instrumentos. Por último se presenta los

hallazgos de la investigación y su correspondiente análisis de acuerdo a las categorías de indagación.

El alcance del análisis de la producción escrita logra identificar diversas manifestaciones de violencia de género en el marco del conflicto armado, entre ellas las físicas, sexuales y psicológicas; así como los principales actores armados legales e ilegales que las practican y sus influencias individuales, familiares y comunitarias. Del mismo modo un hallazgo relevante lo constituye los alcances del derecho a la reparación integral a partir de las acciones implementadas por parte de las instituciones gubernamentales, las consideraciones institucionales y académicas, en las cuales se evidencian reflexiones, críticas y significados entre otros respecto al tema.

SUMMARY

Words Key: Women, integral repair, armed conflict, gender violence, victims, State.

In the mark of the Colombian armed conflict the civil population is violent, given object of practices the conditions of the same one, the situation of the women is aggravating because they are who receive of manifestations of gender violence, which impact directly and indirectly in the diverse dimensions of there lifes. Scene that reflects the damaging of the human rights and the Humanitarian International Right, also from the international standards it is demanded to materialize the responsibility of the State through the internal design of mechanisms and instruments that guarantee the integral repair that is the Law 975 of 2005 for this case; thematic that it has not been approached from the profession of Social Work and reason why they are carried out a documental investigation starting from written during the period 2003 - 2007, constituted by articles of specialized magazine, bulletins, reports, books and investigations, published by feminine organizations of human rights, government and academic institutions.

RESUMEN

Palabras Clave: Mujeres, reparación integral, conflicto armado, violencia de género, víctimas, Estado.

En el marco del conflicto armado colombiano la población civil es objeto de prácticas violentas, dada las condiciones del mismo, la situación de las mujeres es agravante pues son receptoras de manifestaciones de violencia de género, las cuales inciden directamente e indirectamente en las diversas dimensiones de su vida. Panorama que refleja la vulneración de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, además desde los estándares internacionales se exige materializar la responsabilidad del Estado a través del diseño interno

de mecanismos e instrumentos que garanticen la reparación integral, que para este caso es la Ley 975 de 2005; temática que no ha sido abordado desde la profesión de Trabajo Social y por lo cual se realiza una investigación documental a partir de la producción escrita durante el periodo 2003 – 2007, constituida por 53 documentos escogidos según los criterios de selección establecidos, entre ellos artículos de revista especializada, boletines, informes, libros e investigaciones, publicados por organizaciones femeninas y de Derechos Humanos e instituciones gubernamentales y académicas. Se logra identificar las violencias de género, sus influencias individuales, familiares y comunitarias así como el desarrollo del derecho a la reparación a partir de reflexiones, debates y cuestionamientos y los principales obstáculos para la garantía de dicho derecho para las víctimas.

1. ANTECEDENTES

El conflicto armado interno colombiano ha tenido gran incidencia en la población civil, constituyéndola como un claro objetivo de acciones violentas, situación que se agudiza para grupos poblacionales históricamente marginados y vulnerados entre ellos minorías étnicas, niños, niñas y mujeres.

Enfatizando este análisis en las mujeres, la bibliografía ubicada sitúa que desde la época denominada *la violencia*, en la que existió confrontación entre los partidos políticos Liberal y Conservador durante los años cincuenta, las mujeres fueron principales víctimas de violencia (...) “una de las expresiones más frecuentes y horripilantes de la misma fue las masacres de familias campesinas enteras, incluyendo mujeres y niños, pertenecientes al bando político opuesto (...) En esas masacres, las mujeres no eran simplemente víctimas por añadidura, sino que su muerte violenta y frecuentemente su violación, tortura y mutilación cuando estaban embarazadas cumplía un fuerte papel simbólico”. (Arocha et al, 1998:239).

Sin embargo pasado casi medio siglo y pese a las transformaciones del conflicto armado interno colombiano, actualmente en la dinámica de relacionamiento entre los diferentes actores armados¹, persiste una gran incidencia de acciones violentas² en contra de las mujeres, que infringen los principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Frente a esta situación durante la historia política colombiana han surgido desmovilizaciones de grupos al margen de la ley, del mismo modo se ha diseñado diversos marcos jurídicos por parte de los últimos gobiernos³, que plantean entre otros aspectos alternativas de atención para la población civil víctima del conflicto y una posible salida al mismo. Sin embargo estas acciones resultan insuficientes para la compleja realidad que enfrentan la población colombiana, razón por la cual durante el primer mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez, surge el Proyecto de Ley 085 o también denominado de “*alternatividad penal*”, que contemplaba investigación, juicio y condena, para los responsables de delitos. Se establecía además la obligación de reparar a las víctimas y el otorgamiento del beneficio de suspensión condicional de la pena a quienes, habiendo cumplido los anteriores requisitos, contribuyeran a la consolidación de la paz nacional.

Luego de varias discusiones en Senado y Congreso de la República fue aprobada la Ley 975 de 2005⁴ o “*Ley de justicia paz y reparación*”⁵, por la cual se dictan disposiciones

¹ Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Policía Nacional, Ejército nacional de Colombia, entre otros.

² Desplazamiento, pérdida de territorios, abusos y daños físicos, psicológicos, morales, entre otros.

³ Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) surge la Ley 418 de 1997, por la cual se; esta ley fue prorrogada en el gobierno de Andrés Pastrana (1999-2002) por la expedición de la Ley 782 de 2002 la cual dicta disposiciones para facilitar el dialogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, reconciliación entre los colombianos y convivencia pacífica.

⁴ La Ley 975 esta fundamentada en la necesidad de cumplir con estándares internacionales, en los cuales es explícito los principios aplicables a la verdad justicia y reparación.

⁵ El proceso de aprobación de la Ley 975 de 2005 se desarrollará en el marco normativo.

para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

Esta ley fundamentada en principios de verdad, justicia y reparación concibe el marco jurídico como un “espacio generador de consenso constituido por la interacción entre la víctima y el culpable, lo que permite hacer de la primera el centro de ese espacio y evita que el culpable continúe ejecutando delitos y contribuya eficazmente a la reparación de las víctimas y la superación del conflicto. (Zaffaroni et. Al, 2006). El artículo octavo de la Ley se refiere al derecho a la reparación, que comprenden las acciones que dirigidas a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción de la víctimas del conflicto armado; y las garantías de no repetición de las conductas.

De este modo, con el fin de conocer las principales investigaciones realizadas, en torno a las mujeres en el conflicto armado y el derecho a la reparación integral, el presente trabajo se consolida a partir de la revisión investigativa realizada en diferentes Universidades de Bogotá⁶.

Los principales hallazgos de la revisión investigativa realizada entre el periodo 2003-2007 evidenciaron la existencia de 17 investigaciones en programas de pregrado y postgrado que abordan la Ley 975 de 2005, entre ellos, los programas de Derecho, Psicología, Politología, Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales, Lenguajes y Estudios Socioculturales; el resultado del rastreo investigativo demuestra la ausencia en el abordaje del tema por parte de la profesión de Trabajo Social. (Ver anexo A).

De acuerdo a lo anterior se identifican 7 investigaciones en Derecho, 1 desde Lenguajes y Estudios Socioculturales, 4 desde Politología, 1 desde Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales y 4 de Psicología.

Las investigaciones realizadas por los programas de pregrado y posgrado de Derecho, avanzan en la descripción y análisis de los alcances e impactos de la ley, su importancia dentro de un proceso de paz, su relación con el Derecho Internacional Humanitario –DIH. También enfatiza en el desarrollo del concepto de justicia transicional en Colombia, en relación con los principios de justicia, paz y reparación. Desde la perspectiva de víctimas, analiza la tensión entre la búsqueda de la paz y la limitación de los derechos de las mismas a la verdad justicia y reparación; por último analiza cómo las comisiones de la verdad procuran la reivindicación de los derechos las víctimas.

En el programa de Pregrado, Lenguajes y Estudios Socioculturales, desde la perspectiva filosófica, fundamentada en la conceptualización desarrollada por Jacques Derrida, se analiza el discurso de la ley de justicia y paz, así como la relación entre la noción de perdón y el proceso de reconciliación nacional.

Las investigaciones desarrolladas por el programa de Politología, efectúan un seguimiento a periódicos nacionales y conceptualiza el rol de las víctimas en el proceso de formulación y aplicación de la ley, además realiza un análisis comparativo a las condiciones

⁶ Universidades consultadas: los Andes, Católica, Colegio Mayor de Cundinamarca, Externado de Colombia, Gran Colombia, Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, Manuela Beltrán, Minuto de Dios, Monserrate, Piloto de Colombia, Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Santo Tomas.

contextuales que afectan los esquemas de reparación en situaciones de transición de guerra a paz y de sistemas autoritarios a regímenes civiles, y por último analiza las características de las guerras civiles y sus consecuencias para los procesos de reparación de las víctimas, en un contexto de conflicto armado no internacional.

En Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, se analiza el contexto político y jurídico de la expedición de la Ley 975 de 2005; así mismo caracteriza los principales rasgos del conflicto armado interno en Colombia.

El análisis realizado por Psicología, retoma el tema de la Ley entorno a la manifestación de significados, sentidos, enunciados, relaciones, discursos en la memoria del perdón y la reparación en los acuerdos de paz realizados históricamente en Colombia, además Indaga acerca de las representaciones sociales que tienen las AUC y el Gobierno Nacional, sobre justicia, paz y reparación, también conoce a través de las narraciones, los significados de reparación psicosocial construidos por víctimas de violencia política en Colombia pertenecientes al movimiento “Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad”.

De otra parte en la revisión documental realizada, se consultaron textos que describen a grandes rasgos, características del proceso de negociación emprendido a raíz de la promulgación de la Ley (avances, implicaciones, beneficios, falencias de la ley en relación con el genocidio ocurrido en Colombia) y por último, describe casos de reparación latinoamericana desde el acceso a la justicia paz y reparación por parte del Estado, del mismo modo describen los convenios internacionales, referidos a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y la responsabilidad estatal por violación de los mismos.

Respecto al derecho a la reparación integral, se describen generalidades e implicaciones del mismo y se reconoce como principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; desde el análisis jurídico se muestra la estructura y forma de reparar a las víctimas de los daños ocasionados por el conflicto, así como la escasa visibilidad y participación que han tenido en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones respecto a sus derechos fundamentales. (Ver Anexo B)

De acuerdo a la revisión investigativa realizada en la Universidad de La Salle se identificaron tres investigaciones dirigidas al tema de mujeres avanzando en el análisis del rol femenino en actividades de comercio informal, su participación en Consejo Local de Política Social y la Participación de las Mujeres en contextos educativos, lo cual demuestra que el avance investigativo en relación a la violencia de género en el marco del conflicto armado y el derecho la reparación integral aún no sido emprendido.

Los resultados de la revisión investigativa y documental referida al derecho a la reparación integral y la violencia de género en el marco del conflicto armado, permite reconocer que aunque Trabajo Social ha avanzado en la producción de conocimiento en relación con la mujer en diferentes contextos, aún requiere emprender la producción de conocimiento entorno a las manifestaciones de violencia de género en el marco del conflicto armado y el derecho a la reparación integral, lo cual se constituye en el objetivo de la presente investigación.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La violencia contra las mujeres es un hecho de incidencia universal, con antecedentes milenarios al menos en la cultura occidental/patriarcal, situación que se agudiza en contextos de conflicto armado.

En el marco del conflicto armado, la violencia como ejercicio del poder, afecta la libertad y dignidad de mujeres y hombres en diversas maneras, por ejemplo como lo plantea Byrne los hombres en edad para combatir son frecuentemente a quienes se recluta y, por lo tanto, resultan asesinados o lastimados durante las batallas. Las mujeres, sin embargo, son las principales víctimas de la guerra. Lo son de manera directa como fatalidades o bajas, o bien indirectamente a través del resquebrajamiento de las estructuras familiares y comunitarias. (El Jack, 2003 citando a Byrne, 1996).

El anterior panorama evidencia que tanto hombres como mujeres son vulnerables a la violencia en el marco del conflicto armado, sin embargo la situación de las mujeres se agudiza cuando como expresión máxima del poder surge el dominio que “busca la apropiación y desposeimiento del otro y se mantiene al otro en un estado de sumisión y dependencia”. (Corsi, 2003:124 citando a Irigoyen, 1999)

Una muestra del dominio⁷ en las relaciones de género en el marco del conflicto armado, es la violencia sexual utilizada como práctica de guerra y ejercicio máximo de poder sobre las mujeres y que pocas veces es públicamente reconocida.

En este sentido, la violencia sexual se convierte en “la máxima manifestación de violencia de género, porque se ejerce directamente sobre el cuerpo de las mujeres y se basa en una diferencia física y biológica no elegida. La forma más grave de violencia sexual es la violación carnal que deja, en la mujer, secuelas emocionales – y a veces físicas imborrables”. (Lelièvre, 2004:113)

De acuerdo a lo anterior se precisan influencias diferenciados para las mujeres, convirtiéndolas en población vulnerable al experimentar diversas manifestaciones de violencia que trastornan dimensiones tanto personales y físicas (involucra aspectos íntimos, emocionales, mentales entre otros) como sociales (políticos, económicos, culturales entre otros) de su vida; Respecto a las dimensiones físicas y personales las mujeres están expuestas a embarazos forzados y en algunos casos abortos forzados, culpa, confusión, socavamiento progresivo de la autoestima, depresión, vergüenza y sometimiento. En cuanto a las dimensiones sociales, existe un incremento de la inseguridad física, así como la desestructuración familiar y paralización de las actividades económicas, destrucción violenta de bienes materiales que en algunos casos conlleva al desplazamiento, un incremento de las pobreza, dando lugar a la miseria y transformaciones en los roles del género femenino.

⁷ La expresión de dominio en las relaciones de género empeora los patrones existentes de violencia sexual contra las mujeres, la violencia cotidiana se incrementa en el contexto de situaciones de conflicto masculino y militarizado al establecer campos de violación y la prestación de servicios sexuales a las fuerzas armadas de ocupación a cambio de recursos, tales como alimentos y protección, es un ejemplo de la violencia basada en el género (VBG) durante el conflicto y después de éste. (El Jack; 2003)

De esta manera en la dinámica del conflicto armado se “refuerza patrones de discriminación y violencia que ya estaban presentes desde los momentos previos al conflicto y que siguen manteniéndose en los escenarios privados, supuestamente ajenos al mismo”. (Ramírez, 2007:15) Así, en diversos ámbitos la vida social como la economía, política, cultura entre otras, es innegable la discriminación hacia las mujeres.

Desde este punto es relevante señalar que las mujeres en el ámbito político “(...) en su gran mayoría, han estado marginadas de los niveles de decisión que determinan el funcionamiento del Estado, de ahí que resulten ser más víctimas⁸ que agenciadoras de la violencia política: mueren ellas, mueren sus hijos en sus vientres, ven perecer o desaparecer a sus padres, esposos, hermanos, en miles de casos los proveedores del sustento básico para ellas y sus hijos”. (Uribe, 1995:354)

Ante este panorama el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2003 reconoce que las mujeres colombianas son víctimas de violencia política en los siguientes sentidos:

- Como blanco directo de las acciones violentas.
- Como víctima incidental de formas de agresión sexual previas o simultáneas a tales acciones.
- Como miembro (en tanto madre, compañera, hija, hermana, amiga) de una red de relaciones familiares y afectivas que resulta desmembrada por esos actos.

En este contexto es conveniente comprender primero, cómo el sistema o red social, subsistemas o nodos de las mujeres se ve desestructurado por la influencia de las manifestaciones de la violencia de género, dado que la mujer se desenvuelve en diversas esferas de la vida social; segundo, el rompimiento de las redes y tejido social del cual hace parte la mujer; en un tercer aspecto reafirma que los cuerpos de las mujeres son objeto de agresión ó violencia sexual⁹, entendida ésta como "máxima humillación y expresión del más absoluto desprecio hacia el enemigo; ella también cumple funciones de terror y silenciamiento (...) la penetración de la violencia en las esferas íntimas de las familias campesinas ha generado una reproducción de la violencia en las historias personales (...) las denuncias de violaciones sexuales como práctica de guerra son escasas e involucran a todos los actores armados: el ejército, guerrilla, grupos paramilitares (...)” (Meertens, 1998:240:243).

Lo anterior configura un complejo panorama en la garantía de Derechos Humanos de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, se evidencia de manera explícita la vulnerabilidad de las mujeres en este contexto, pues en él se transforma las cambiantes relaciones de poder y se multiplica actos de violencia en contra de las mujeres infringiendo derechos esenciales como la dignidad, libertad y autonomía que deben ser garantizados y reparados por parte del Estado.

⁸ Se considera pertinente comentar que la mujer no siempre es vista como una víctima dentro de los conflictos armados, existe multiplicidad de roles emprendidos por las mujeres, en ocasiones es instrumentalizada por las partes del conflicto, otros escenarios la mujer asume la jefatura de hogar ante la ausencia de su esposo a causa de la guerra; en otros escenarios, la mujer se destaca como mediadora de paz y finalmente se muestra activa dentro de los conflictos como combatiente.

⁹ Según la Procuraduría General 2006, la Corte Penal Internacional considera la violencia sexual, dentro del conflicto armado, como un crimen de guerra y un delito de lesa humanidad, rechazado por todos los países del mundo porque lesiona la dignidad y los derechos de las personas.

Desde esta perspectiva el Estado Colombiano tiene la responsabilidad de adoptar estándares internacionales, que exigen iniciar procesos que promuevan transiciones duraderas y sostenibles hacia la paz, que respete la justicia, los principios, postulados y disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (Van Hissenhoven, 2006), ante lo cual se implementa la Ley 975 de 2005, que fundamentada en tres componentes (justicia, paz y reparación) pretende facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El sentido de este proceso se fundamenta en la búsqueda de una reconciliación y reconstitución del tejido social, que solo se posibilita al asegurar un mínimo de justicia, de verdad y de reparación en los “paréntesis” penales que cada país diseñe. (Van Hissenhoven, 2006).

Sin embargo el informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, “la Ley de Justicia, Paz y Reparación no contempla de manera integral los efectos del conflicto en las vidas de las mujeres” (Figueroa et al, 2005:6). Por otra parte en el 2007, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación -CNRR- reconoce los avances, referido al trabajo de campo (talleres, conversatorios) en atención a grupos específicos, tales como mujeres, niñas, niños, grupos étnicos etc., y se evidencia el reto de continuar en la construcción de perspectiva de género que permita reparar a la mujeres. (CNRR, 2007).

Por tal razón y dado que la producción de conocimiento frente al tema no ha sido iniciada desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, se hace necesario realizar una investigación documental que de cuenta del siguiente interrogante:

¿Cuáles son las violencias de género ejercidas en contra de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano y el desarrollo del derecho a la reparación integral emprendido por el Estado según la Ley 975 de 2005 desde la producción escrita en el periodo 2003-2007?

1.2 JUSTIFICACIÓN

Abordar las manifestaciones de violencia de género en el marco del conflicto armado y el derecho a la reparación integral según la Ley 975 de 2005, invita a analizar una situación relacional entre un contexto específico de las mujeres y lo formulado normativamente por parte del Estado, en este sentido la presente investigación es significativa para la profesión de Trabajo Social desde tres aspectos:

Primero, permite analizar una situación coyuntural de bases estructurales que influye directamente sobre sujetos activos poseedores de derecho, con incidencia política, social y familiar, que culturalmente han sido vulnerables a todo tipo de violencia; segundo, la presente investigación se convierte en un primer acercamiento desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Salle respecto al tema, pues desde la óptica de

perspectiva de género no se evidenció un análisis a dicha situación. Por último, se suma a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional, a través de ASCUN (Asociación de Universidades de Colombia), que señala responsabilidad social y ética de las Universidades con respecto a situación de violencia que se presenta en el país y más específicamente lo relacionado con las mujeres en el marco del conflicto armado, además de las implicaciones en lo individual, familiar, comunitario.

Lo anterior invita a comprender que el análisis propuesto se articula a la línea de investigación *Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático*, pues contribuye en la descripción del panorama de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, en el cual es evidente la transformación de prácticas violentas que infringen directa e indirectamente en la garantía de los Derechos Humanos de las mujeres; esta garantía se convierte en una responsabilidad estatal, razón por la cual relacionar esta situación con el derecho a la reparación integral establecido en la Ley 975 de 2005, conlleva a articular el análisis fundamentado en la perspectiva de género a la sublínea de *Procesos de Inclusión y Exclusión Social*, puesto que la influencia de las manifestaciones de violencia de género en las diferentes dimensiones de la mujer requiere tener una perspectiva crítica desde Trabajo Social a los parámetros formulados desde la Ley.

El interés del equipo investigador se centra en abordar una problemática social actual, con implicaciones socio-políticas de carácter normativo y focalizar el análisis de un grupo poblacional vulnerable, sujeto de intervención profesional; en este sentido durante el proceso investigativo se convierte en un reto analizar una realidad social desde la producción escrita a la luz de la normatividad establecida conservando la especificidad de Trabajo Social.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

Analizar las violencias de género ejercidas en contra de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano y los alcances de reparación integral, a partir de la Ley 975 de 2005 desde la producción escrita en el periodo 2003-2007.

1.3.2 Específicos

- Describir las manifestaciones de violencia de género y su influencia individual, familiar y comunitaria en las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano.
- Identificar el desarrollo de la reparación integral emprendido por el Estado desde las consideraciones académicas e institucionales a partir de la expedición de la Ley 975 de 2005.

2. REFERENTES

2.1 REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL

Con el propósito de fundamentar la presente investigación a continuación se señalan algunos aportes teóricos y conceptuales sobre las categorías relevantes para la investigación.

2.1.1 Perspectiva de género. Durante los años cincuenta a partir de los aportes efectuados por psicoanalistas y psiquiatras como Molloy y Stoller (1968), se realizaron las primeras aproximaciones sobre género; ellos establecieron las diferencias entre lo que hoy se entiende como sexo y género, definiendo a este último, como el comportamiento social esperado a partir de su sexo biológico macho/hembra.

Estas aproximaciones básicas resultaron significativas para el desarrollo de la temática en los años ochenta, época en la cual diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas analizaron la construcción cultural de la diferencia sexual y como resultado de este análisis se desarrollaron las primeras teorías de género. (Herrera, 2007:8)

Una de las Teorías más significativas es la planteada por Joan Scott, (1990), su explicación referida al concepto de género se fundamenta con base en dos premisas; la primera se refiere a que el género es un “elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos”. La segunda apunta a que el género es una “forma primaria de las relaciones significantes del poder”. (Viveros, 2000 citando Scott: 59). El concepto de género, en América Latina empieza a utilizarse en los años setenta, con un referente que ciertamente no es sinónimo de mujer. Durante la década de los noventa, el contenido de género empieza a consolidarse, estableciéndose que el género no se refiere a hombres y mujeres, sino a las relaciones entre ambos, que se construyen socialmente.

La postura que se articula a la temática de la presente investigación es la planteada por Donny Meertens, la cual señala que el concepto de género “nos remite a la construcción social de las diferencias entre los sexos y por consiguiente a la constitución de identidades femeninas y masculinas. Reviste además un carácter relacional y específico en el tiempo y en el espacio. Permite no sólo visualizar el componente de dominación sexual en las violencias, muchas veces presente a través de representaciones simbólicas, sino también diferenciar entre los efectos de la violencia política sobre hombres y sobre mujeres”. (Meertens, 1995: 40-41)

Según Meertens (1995) la perspectiva de género en el contexto de conflicto armado es significativa, pues permite enfocar las representaciones cambiantes de identidad de hombres y mujeres en un contexto de violencia y también las relaciones cambiantes de poder. Además permite evidenciar como la construcción de imaginarios colectivos tienden a asociar la violencia pública-política con el mundo masculino y la que involucra a la mujer se restringe al ámbito doméstico. (Meertens, 1997:31)

El concepto de violencia¹⁰ desde la perspectiva de género está íntimamente ligado a las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, las cuales se expresan en contextos (...) “íntimos e individuales (por ejemplo la violación sexual que es más frecuente para las mujeres) y también contextos públicos y colectivos de la guerra (que tienen un mayor compromiso masculino)”. Sin embargo tanto para mujeres como para hombres se comparte un elemento en común: “(...) la destrucción de bienes, de cuerpos, de identidades, de relaciones de procesos sociales”. (Meertens, 1997:31)

Desde la perspectiva de género surge una categoría de análisis de la violencia, esta es la violencia basada en el género (VBG), según El Jack, (2003) la VBG se manifiesta en algunos casos a través de la “violencia, sexual o de otro tipo, que se apoya en las normas y exclusiones de género para desmoralizar física y psicológicamente a las personas. Aunque los blancos de la VBG son más a menudo las mujeres, tanto ellas como los hombres pueden ser víctimas y objeto de violación; de una mayor tasa de infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); de daños a su salud física y psicológica; de vidas desbaratadas, así como de la pérdida de confianza personal y autoestima”.

De acuerdo a lo anterior en el marco del conflicto armado surgen modalidades de violencias entre las que se encuentra la física, sexual y psicológica.

La violencia física utiliza la fuerza para intimidar, controlar o forzar a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad y constituye un atentado a la integridad física de las víctimas. Incluye, entre otras prácticas como golpes con las manos, quemaduras, estrangulamientos, secuestros, sacudidas y heridas con arma de fuego. (En Revista actualidad colombiana, 2006)

Respecto a la violencia sexual se desarrolla ampliamente en los Elementos del Crimen de la Corte Penal Internacional, que la concibe como la conducta por la cual el auto haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o coacción, como la causada por el miedo a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas o contra otra o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento

Además de la violación sexual, existen otras prácticas que constituyen agresiones de naturaleza sexual, que no están reguladas en nuestro Código Penal, pero que han sido definidas a nivel internacional. Algunas de ellas son:

La esclavitud sexual como el ejercicio del derecho de propiedad sobre una o más víctimas, como comprarlas, venderlas, prestarlas, darlas en trueque o todas ellas, con el fin que éstas realicen actos de naturaleza sexual.

¹⁰ Violencia es un concepto amplio, que se facilita para múltiples definiciones y significados, generalmente este término se define como “un acto intencional para herir o eliminar a un individuo o grupo, empleando la fuerza, con el fin de obtener algo no consentido”. (Meertens, 1995 citando a Yves Michaud: 40)

El embarazo forzado es el confinamiento de una o más mujeres que fueron embarazadas por la fuerza, con el fin de cambiar la composición étnica de una población o cualquier otro fin contrario al derecho.

El Aborto forzado se presenta en casos en los que se obliga a una mujer a abortar mediante el uso de la fuerza, la amenaza o cualquier forma de coacción. Paralelo a esta practica se ubica la prostitución forzada que consiste en obligar a una o más personas a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza, amenaza del uso de la fuerza o la coacción, con el fin de obtener ventajas económicas de dichos actos. También surge la esterilización forzada que consiste en privar a una o más personas, sin su libre consentimiento, de su capacidad de reproducción biológica, y sin justificación alguna en un tratamiento médico o clínico. (Corte Penal Internacional, 2003)

En relación con la violencia psicológica se representa a través de cualquier acción, comportamiento u omisión intencionada que produce sufrimiento y pretende ser una medida de control que amenaza la integridad o el desarrollo de la mujer. Se basa principalmente en la degradación de la imagen que la mujer tiene de sí misma, a través de menosprecios, descalificaciones, juegos mentales, humillaciones, críticas, indiferencia, ridiculizaciones, hostigamiento, desprecios, gritos, insultos, maltratos, ordenes, manipulación o cualquier forma de desvalorización con palabras o gestos. Esta forma de violencia es difícil de identificar porque es insidiosa y no deja marcas aparentes; sin embargo, es muy destructiva y conduce a la muerte progresiva de los deseos y de la voluntad de la mujer. Esta violencia incluye la utilización de la imagen estereotipada de la mujer (objeto sexual, madre-hija sumisa, etc.) en los medios de comunicación. (En Revista actualidad colombiana, 2006)

2.1.2 Víctima. Según las directrices básicas sobre el derecho a obtener reparación, planteadas por Bassiouni 2005, particularmente la directriz 8, incorpora el concepto de víctima, como toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas y mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de Derechos Humanos o de una violación grave del Derecho Internacional Humanitario. En el derecho interno, este término comprenderá a la familia inmediata o a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. (Bassiouni, 2005)

En este sentido el concepto abarca de una manera más amplia la noción de víctima, pues no sólo comprende a las personas sobre las cuales recaen directamente las consecuencias de la violación (víctima directa), sino también a sus familiares o dependientes de ellas (víctima indirecta). De igual modo el concepto tiene abarca tanto los daños de carácter individual como colectivo, en el que se incluye conductas que violan los derechos humanos a los miembros de una comunidad determinada, así de acuerdo a los Derecho Humanos y el Derecho Internacional Humanitario la víctima tiene el derecho a una reparación integral y proporcional a la gravedad de la conducta y el daño sufrido. (Fundación Social, 2006)

2.1.3 Derecho a la reparación integral. El concepto de reparación, abordado desde 1997 por Louis Joinet, hace parte del conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, dentro de los cuales determina que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado a reparar y el deber a dirigirse contra el autor¹¹. (Joinet, 1997). (Ver Anexo C.).

La reparación abarca los daños y perjuicios sufridos por la víctima, dentro de un proceso de violación de sus derechos; implica pues, que su implementación debe ser compleja, teniendo en cuenta que las víctimas, por ejemplo no sólo sufren daños que se puedan determinar en términos objetivos ó subjetivos, sino que es un proceso que entremezcla diferentes aspectos, entre los que pueden estar daños individuales ó colectivos, psicológicos, emocionales, materiales, entre otros.

En el abordaje que Louis Joinet realiza en relación con el derecho a la reparación es importante definir las medidas individuales y colectivas que reparen a las víctimas, ante lo cual el autor plantea como medidas individuales como aquellas que enfatizan al derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación.

La restitución comprende la devolución a la víctima, en la medida de lo posible, a su situación anterior; la indemnización referida a los daños físicos o mentales sufridos, incluidas las oportunidades perdidas, la difamación y los gastos de asistencia letrada. Por último, la rehabilitación, se entiende como la asistencia médica, incluido el tratamiento psicológico y psiquiátrico brindado a la víctima.

En cuanto a las medidas colectivas, implica la adopción de medidas a restaurar, indemnizar los derechos de las colectividades o comunidades afectadas directamente por las violaciones graves del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario –DIH- (Fundación Social, 2004)

La indemnización, es entendida como “la compensación económica para resarcir los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) en materiales causados con las actuaciones constitutivas de graves violaciones de Derechos Humanos o infracciones al DIH”. (Fundación Social, 2006:27)

Las formas de reparación, deben darse en condiciones de igualdad, tanto para los hombres como para las mujeres; esto implica que la reparación se de sin ningún tipo de discriminación.

Además, teniendo en cuenta que se repara sobre hechos o situaciones particulares, reales y derivados de contextos diferentes para cada persona, la reparación fundamentarse en la particularidad de cada caso, lo cual remite al análisis complejo de los efectos del conflicto armado ó daño ocasionado sobre la víctima.

¹¹ El derecho a la reparación fue abordado por Louis Joinet en la Comisión de Derechos Humanos en el informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, Doc.E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, anexo II.

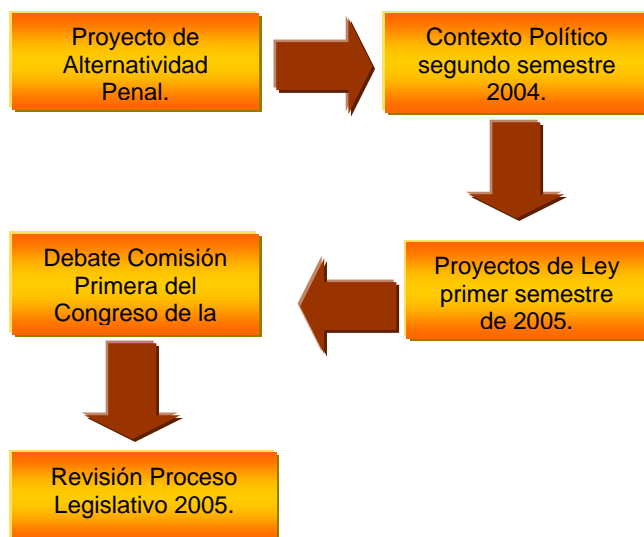
2.2 REFERENTE NORMATIVO

Dadas las condiciones de vulneración de Derechos Humanos que se evidencia en el marco del conflicto armado, y teniendo en cuenta que las prácticas de violencia dirigidas hacia las mujeres y la dinámica del mismo degrada su dignidad humana, existe tanto en el marco internacional como en el nacional una rica compilación de instrumentos y jurisprudencial relacionada con el derecho a la reparación integral a daños ocasionados en este contexto. Dichos instrumentos internacionales demuestran el avance normativo que promueve la reivindicación de los derechos humanos violados a las mujeres en el contexto armado a partir la responsabilidad y rol activo que debe ser ejercido por parte de los Estados que vivencian esta problemática, en este sentido, lo plasmado en el derecho internacional influye e inspira el diseño de mecanismos en el derecho interno, así las disposiciones legislativas se materializan en los procedimientos constitucionales, los recursos judiciales y formulación legal de cada país.

De acuerdo a lo anterior, los instrumentos internacionales sobre los derechos de las mujeres y el derecho a la reparación se articulan en tres grandes grupos, entre ellos, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Colombiano, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. (Ver anexo D.).

De igual forma, es importante retomar el referente normativo nacional, entre el que se evidencia los artículos constitucionales relacionados y la legislación con el tema, y en particular lo relacionado con el proceso de creación Ley 975 de 2005, que según Van Hissenhoven 2006 se constituyó en la formalización de un marco jurídico resultado de intensos debates y negociaciones políticas, para comprender su proceso de creación es necesario hacer referencia a la historia del trámite de la ley en el Congreso de la República de acuerdo a los cinco acontecimientos mencionados por el autor. (Ver anexo E.)

Figura 1. Momentos de aprobación Ley 975 de 2005.



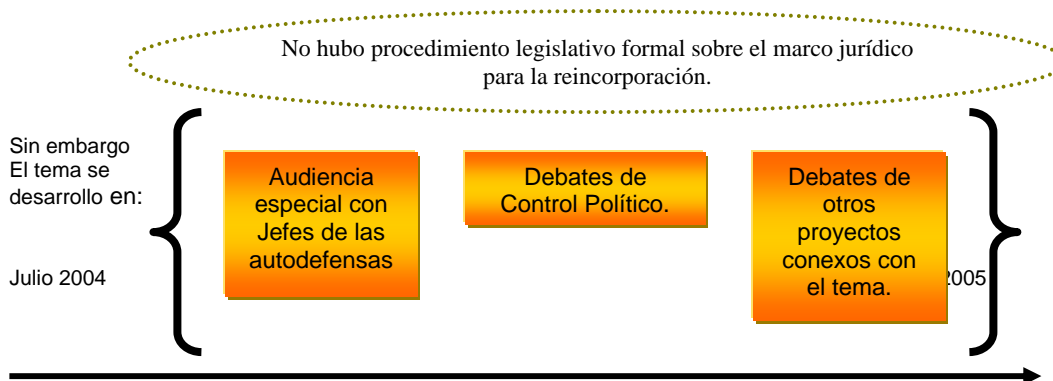
Fuente 1. Elaboración grupo investigador 2008

Proyecto de Alternatividad Penal. Presentado el 21 en Agosto de 2003 en el Senado de la República por el entonces Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, aunque generó la discusión acerca de la reincorporación de los grupos al margen de la ley, no alcanzó la primera ronda de debates requerida según la Constitución Política de Colombia para que un proyecto de ley se convierta en Ley de la República.

Contexto Político segundo semestre 2004. Durante julio de 2004 y febrero 3 de 2005 no se tramitó ningún proyecto de ley relativo a la reincorporación a la vida civil de grupos al margen de la ley; sin embargo el Congreso de la República debatió el tema de la desmovilización y en uso de su facultad de control varios funcionarios de gobierno fueron citados para que respondieran sobre el proceso de paz con la autodefensas.

Paralelo a esta situación, los jefes de las autodefensas se presentaron en una audiencia pública especial organizada por la Cámara de Representantes.

Figura 2. Características del contexto político semestre 2004



Fuente: (Van Hissenhoven, 2006)

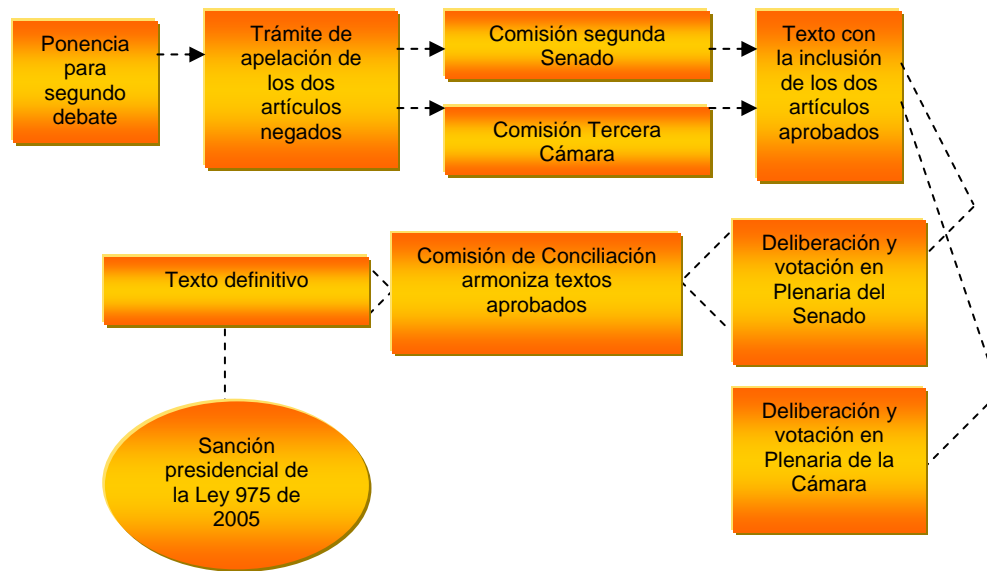
Presentación proyectos de Ley semestre de 2005. En febrero de 2005, se presentaron ante el Congreso de la República nueve proyectos de ley referidos al tema de la reincorporación de la vida civil de los grupos armados al margen de la ley. Durante este periodo también se realizaron dos audiencias, la primera de ellas discutió el tema de las tierras y el proceso de paz en Colombia y la última escuchó los planteamientos de las víctimas del conflicto.

Debate Comisión Primera del Congreso de la República. Durante marzo 1 a abril 28 de 2005 se desarrolló la primera ronda de debates de los proyectos acumulados en las Comisiones Primeras del Congreso de la República.

En el proceso legislativo se estudio dos ponencias paralelas, la primera de ellas, la ponencia base respaldada por el Gobierno y la ponencia alterna defendida entre otros congresistas por, Rafael Pardo y Gina Parody. Se continuó con la revisión de debates generados en las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara, este proceso termina con el estudio de la votación y casi total aprobación, en el primer debate articulado con la ponencia base.

Revisión Proceso Legislativo 2005. En la ponencia base respaldada por el Gobierno se apelaron dos artículos (61 y 64) fueron negados por las Comisiones, lo cual generó la suspensión del debate; ante esto, la Comisión Segunda del Senado y la Tercera de la Cámara debatieron aprobaron dichos artículos. Una vez incluidos los artículos las plenarias debatieron y votaron el texto completo de la ley. Las dos Cámaras sesionaron y aprobaron el texto de la Ley del 21 de junio de 2005; el 22 de junio de 2005 el texto fue aprobado por cada una de las Cámaras y el Presidente Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley el 25 de julio de 2005, el proceso legislativo en plenaria fue el siguiente:

Figura 3. Proceso Legislativo 2005



Fuente: (Van Hissenhoven, 2006)

En este sentido la Ley 975 de 2005 en el artículo 5, entiende por víctima a la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

También incluye como víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Igualmente se considera como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

De esta manera la condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo documental la cual “(...) trata de hacer una “lectura” de los resultados alcanzados en los procesos sistemáticos de los conocimientos previos a ella, se constituye a partir de la **interpretación**, (...) porque lo que se está haciendo es un esfuerzo por establecer un diálogo entre: la propuesta de conocimiento que desarrolló un proceso específico de indagación y un fenómeno al que se quiere referirlo nuevamente”. (Vargas Guillen, 1986:8)

Lo anterior “(...) se hace posible siempre por la potencia de la definición de los problemas a los cuales se relaciona la información existente. Por ello queda a la vista la necesidad de hacer del texto un elemento válido de estudio en relación con un problema definido y delimitado. La consistencia de los análisis que de allí se deriven se alcanza por la sistematicidad con la que “ponga a hablar” al texto original”. (Vargas Guillen, 1986:9)

Este tipo de investigación “depende fundamentalmente de la información que se recoge o se consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio como todo material de índole permanente, es decir al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento”. (Cazares et al, 2003:18)

De acuerdo a los autores consultados las fuentes documentales pueden ser entre otros documentos escritos como libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas; documentos fílmicos, como películas, diapositivas, filminas, documentos grabados como discos, cintas y casetes; sin embargo para la presente investigación se fundamenta a partir de la producción escrita (boletines, informes, artículos de revistas especializadas, trabajos de grado, entre otros) que dará cuenta del tema.

En este sentido la investigación documental suele tener una serie de etapas que permiten dar cuenta del proceso investigativo a través del cual se revisa sobre el tema seleccionado, entre ellas se encuentra: selección del tema, acopio de bibliografía básica sobre el tema, elaboración de fichas bibliográficas, lectura rápida del material, delimitación del tema, elaboración del esquema de trabajo (matriz procesamiento por categoría), ampliación del material sobre el tema delimitado, lectura minuciosa de la bibliografía, elaboración de fichas de contenido, organización de las fichas de contenido y revisión del esquema, organización definitiva del fichero, redacción del trabajo en borrador y final. (Cazares et al, 2003:24-29)

3.2 ENFOQUE

El enfoque **hermenéutico** cobra gran importancia porque permite “comprender las realidades particulares mediante su descripción contextualizada y el análisis de sus dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas”. (Gairin,1995:131). Permite analizar la violencia de género y sus manifestaciones en contra de las mujeres como grupo poblacional desde una percepción holística, en donde se da una relación dialéctica entre pasado, presente y futuro, en relación con el derecho a la reparación integral planteado desde la Ley 975 de 2005.

3.3 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

Dada la selección del tema y su incipiente reflexión y producción escrita desde Trabajo Social, la realización de la presente investigación parte de un nivel exploratorio; este nivel busca captar una perspectiva general del problema de investigación.

En este sentido la investigación además de partir de un nivel exploratorio se complementa con el nivel descriptivo, el cual tiene "la capacidad de seleccionar las características fundamentales del fenómeno de estudio y su descripción más detallada dentro del marco conceptual de referencia". (Cerdeira, 1995:73)

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta que la presente investigación es de tipo documental las fuentes de información fundamentales para alcanzar los objetivos planteados son fuentes secundarias, indagadas en centros de documentación de instituciones como: Defensoría del Pueblo, Fundación Social, Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Comisión Nacional de Reparación CNR; del mismo modo, Universidades de Bogotá entre ellas: los Andes, Católica, Colegio Mayor de Cundinamarca, Externado de Colombia, Gran Colombia, Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, Manuela Beltrán, Minuto de Dios, Monserrate, Piloto de Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario y de La Salle. Sin embargo de acuerdo a los criterios de selección establecidos, sólo se ubicaron fuentes de información relevante en las Universidades de Los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia y de La Salle; en estos se halló 64 producciones escritas como: boletines, informes, artículos de revistas especializadas, trabajos de grado, libros, entre otros. (Ver cuadro 1)

Cuadro 1. Fuentes Secundarias de Información

FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN			
TIPO DE FUENTE	UBICACIÓN	CANTIDAD IDENTIFICADA	CANTIDAD ANALIZADA
Investigaciones	Derecho	3	2
	Finanzas y Relaciones Internacionales	1	1
	Psicología	4	4
	Politología	6	3
	Lenguajes y Estudios Socioculturales	1	1
Documentos	Boletines	10	9
	Informes	21	20
	Libros	10	7
	Artículos de Revista Especializada	8	6
TOTAL		64	53

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN FUENTES INFORMACIÓN

Durante el procesamiento de la información de las 64 producciones escritas identificadas en dichos centros de documentación y de acuerdo a los criterios de selección, entre ellos, investigaciones y documentos publicados y escritos durante el período 2003 – 2007, se considero pertinente retomar la producción documental desde el año 2003, dado que fue el año a partir del cual se iniciaron los trámites correspondientes para la elaboración del proyecto de Ley 085 de alternatividad penal del derecho a la reparación, contexto en el cual se presentan diversos debates y producciones documentales respecto al tema que evidencia el panorama del país y por ende de las víctimas. De igual modo se retoma el año 2007, debido a que fue el año en el que se inicia la presente investigación; por otra parte la producción nacional escrita en español fue relevante puesto que en el revisión preliminar se encontraron textos en inglés y con el fin de facilitar la lectura y comprensión de los mismos, se decidió que fuera de esta manera; por último se seleccionó aquella producción a la que se tuviese la posibilidad de acceder desde Bogotá, a los centros de documentación o desde portales Web, de esta manera fue viable la recolección de producción escrita.

De igual modo, se seleccionó la producción escrita de instituciones gubernamentales, ONG's y académicas que poseen algún tipo de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional en el avance permanente de conocimiento, atención, prestación de servicios o trabajo de campo relacionado con mujeres, Derechos Humanos y/o Derecho a la Reparación; en dichas instituciones la tipología de la producción escrita se clasifica en libros, boletines, investigaciones, artículos de revista e informes, así la unidad de trabajo de la presente investigación documental está constituida por 53 documentos. (Ver cuadro 2.)

De esta manera, a través de la implementación de los criterios de selección se descartaron 11 textos (4 trabajos de grado, 3 libros, 2 artículos de revista, 1 informe y 1 boletín) que aunque en un principio coincidían con los criterios de selección, durante el análisis de contenido temático no brindaban un aporte significativo para el cumplimiento de objetivos de la investigación; así la temática desarrollada se refería a la mujer en el marco del conflicto armado, desde un análisis como sujeto activo o integrantes al margen de la ley (victimaria); un énfasis conceptual en relación con el derecho a la reparación, reconciliación y ejemplificación de procesos de reparación de diferentes países sin incluir a Colombia; análisis del proceso de Justicia y Paz en términos generales sin profundizar en el derecho a la reparación integral; por último, en algunas producciones escritas el contenido se refería a reparación sin una contextualización de éste derecho en el marco del conflicto armado.

Cuadro 2. Unidad de Trabajo Investigación Documental

N°	TÍTULO	AUTOR/ AUTOR CORPORATIVO	AÑO	UBICACIÓN
1	Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia tercer informe -2002.	Mesa de Trabajo Mujer Y Conflicto Armado	2003	En Línea
2	Las mujeres Colombianas frente al Conflicto Armado: Justicia para las Mujeres.	Red Nacional de mujeres, Ruta pacifica de las mujeres, iniciativa de mujeres Colombianas. et.al.	2003	En Línea
3	Informe Derechos de las Mujeres en Colombia 2003.	Red Nacional de Mujeres	2003	Universidad de La Salle
4	Violencia de Género y Conflicto Armado Informe de Interventoría de Un proyecto de investigación.	Presidencia República de Colombia ANUVHR	2003	Universidad de La Salle
5	Las Mujeres en la Guerra	Patricia Lara Salive	2004	Universidad de La Salle
6	Cuarto Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Enero 2003 - Junio 2004	Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado	2004	En Línea
7	Las mujeres en la guerra: de la desigualdad a la autonomía política.	CODHES	2004	Universidad de Los Andes
8	Colombia cuerpos marcados, crímenes silenciados.	Amnistía Internacional	2004	CINEP
9	Quinto Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia	Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado	2005	En Línea
10	Derechos de las víctimas en los proceso de justicia transicional. Justicia, Verdad y Reparación.	Fundación Social	2005	Centro de Documentación Fundación Social

11	Ley de Justicia y paz y Justicia Transicional: un avance significativo.	Roberto Mora Sarasti	2005	Biblioteca Universidad Externado de Colombia
12	La memoria, el perdón y la reparación en los acuerdos de paz y en la prolongación del conflicto armado en Colombia.	Liliana Bastidas, María Gómez, Gutiérrez Pablo	2005	Biblioteca Universidad Pontificia Javeriana. En Línea
13	Las mujeres colombianas frente al conflicto armado: Justicia para las mujeres.	SISMA Mujer	2005	Biblioteca Universidad Nacional.
14	Los Desatinos De La Negociación con los Paramilitares: Reflexiones sobre la Ley de Justicia y Paz	Margarita Palacio Jaramillo.	2005	Biblioteca Universidad Javeriana. En Línea
15	Mujeres toman la palabra en debate sobre verdad, justicia y reparación.	Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz	2005	En Línea
16	La tradición, la semilla y la construcción.	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM Región Andina, Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado.	2005	CINEP
17	Sexto informe sobre violencia política contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. 2002-2006.	Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado	2006	En Línea
18	Proyecto "Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en materia de Desmovilización Reinserción". Tomo II.	Procuraduría General de la Nación	2006	En Línea
19	Hechos del Callejón Boletín 19	PNUD	2006	Hechos del Callejón
20	Asistencia Estatal a los desplazados y reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reparaciones por los daños causados a las víctimas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: una visión general y crítica.	Julián Daniel López Murcia Juana Inés Acosta López	2006	Biblioteca Universidad Javeriana. En Línea
21	Expiación infinita perdón y justicia. Análisis discurso de la Ley 975 de 2005, ley de justicia y paz, confrontado con la noción de perdón de Jacques Derrida.	Julia Alejandra Morales Fontilla	2006	Biblioteca Universidad de Los Andes. En Línea
22	Discusiones en torno a la ley de Justicia y Paz. ¿Dignifica o Desfavorece a las víctimas?	Paula Fonseca José Escobar	2006	Biblioteca Universidad de Los Andes. En

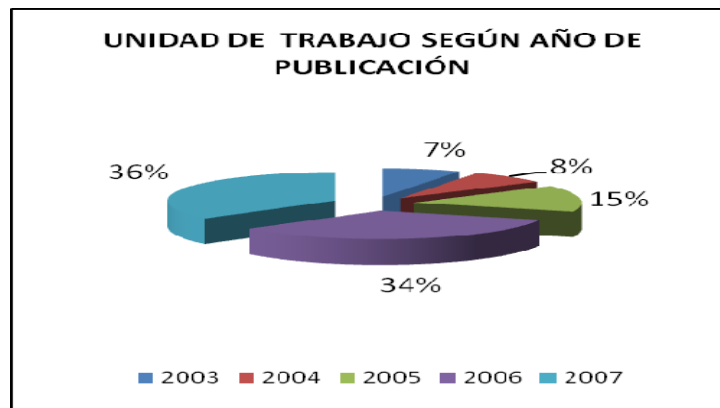
				Línea
23	Condicionamientos internos y externos en la formulación de políticas de justicia y paz. Análisis de la Ley 975 de 2005	Héctor Heli Rojas Jiménez	2006	Biblioteca Universidad Externado de Colombia.
24	Colombia: Brechas, diversidad e iniciativas. Mujeres e igualdad de género en un país de conflicto.	Donny Meertens <i>et al.</i>	2006	Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana
25	Voces de Mujeres. Mujeres construyendo memoria y exigiendo reparación	Iniciativa de Mujeres por la Paz.	2006	En Línea
26	Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.	Alta comisionada de los Derechos Humanos	2006	En Línea
27	Denuncia violaciones de los derechos de las mujeres	Mesa de Trabajo Mujer y conflicto armado	2006	En Línea
28	Ley de Justicia y Paz: ¿Instrumento de Reconciliación Nacional o Manifestación Institucional de la impunidad?	Gardeazabal Rodríguez, Juan Carlos	2006	Biblioteca Universidad de los Andes. En Línea
29	Situación de las mujeres en Colombia. Impacto del conflicto sobre las mujeres.	Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. UNIFEM.	2006	En Línea
30	Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación.	Fundación Social, Consejería en proyectos – Project Counselling Service PCS.	2006	Fundación Social
31	Una mirada hacia adelante: Elementos para la reparación colectiva en Colombia.	Fundación Social – Fundación Konrad Adenauer Stiftung	2006	Biblioteca Universidad de La Salle.
32	Sexto Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia.	Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”	2006	En línea
33	Memoria de mujeres: Guía para documentar y hacer visible el impacto de la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas, en contextos de conflicto armado.	Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”	2006	Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”
34	Hechos del Callejón Boletín 9	PNUD	2006	Hechos del Callejón
35	Séptimo Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia	Mesa de Trabajo Mujer Y Conflicto Armado	2007	En Línea
36	Boletín N° 7	Ruta Pacífica	2007	En Línea

37	Los estándares sobre reparación a las víctimas. Un Límite normativo en la configuración y aplicación de medidas alternativas a la prisión.	Martha Liliana Bertín Gallego	2007	Congreso de la República
38	Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación	2007	En Línea
39	Boletín N° 2.	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación	2007	En línea
40	Significados de reparación psicosocial contruidos por víctimas de violencia política en Colombia, pertenecientes al movimiento "Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad"	Adriana Mendoza Abello, Diana Marcela Espinel Bernal y Liliana Patricia Escobar Mahecha, Raúl Vidales Bohórquez	2007	Biblioteca Universidad Pontificia Javeriana. En Línea
41	Análisis sociodemográfico de las víctimas del conflicto armado: brechas de género. Mesa nacional de incidencia por el derecho a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género	Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz - IMP	2007	Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP.
42	Plan de acción 2007 – 2008. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación	Comisión Nacional de Reparación y reconciliación	2007	En Línea
43	Hacia una reflexión ética del conflicto Colombiano: buscando la "verdad".	Jorge González Jácome	2007	Universidad Javeriana.
44	Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.	Consejo Derechos Humanos - Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia	2007	En línea
45	Boletín Número 26	PNUD	2007	Hechos del Callejón
46	Desplazados sin tierra. ¿Justicia Transicional sin restitución?	Juanita Estrada - Martha Maya	2007	Biblioteca Universidad de los Andes.
47	El estado actual de las víctimas en Colombia: la búsqueda de la verdad.	Ismael Roldán Valencia Revista Colombiana de Psiquiatría	2007	Biblioteca Universidad Javeriana. En Línea
48	Obstáculos a la reparación integral de las víctimas de los conflictos armados internos.	Claudia Caicedo Apraez	2007	Biblioteca Universidad Javeriana. En Línea
49	Colombia Rural Desplazamiento forzado, territorio y reparación.	Flor Edilma Osorio Pérez, Gloria Restrepo	2007	Biblioteca Universidad Javeriana

50	Estudio de las representaciones sociales que tienen las AUC y el Gobierno Nacional, sobre los principios de Justicia, Paz, Verdad, Perdón y Reparación en el marco del proceso de paz colombiano.	María Teresa Alcocer, Sylvia Reyes.	2007	Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana. En Línea
51	El mosaico de la memoria. Experiencias locales, no oficiales o parciales de búsqueda de la verdad histórica.	Fundación Social	2007	Fundación Social
52	Informe al Congreso Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación	2007	En Línea
53	Boletín N° 1.	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación	2007	En Línea

En lo referido a las fechas de publicación de la producción escrita en la unidad de trabajo de la presente investigación, se evidencia la tendencia ascendente en los años 2006 y 2007 que conjuntamente concentran un 69%. Lo anterior constata que la temática investigada genera gran interés académico e institucional por cuanto existen una serie de debates, críticas y consideraciones actuales.

Gráfico 4. Unidad de trabajo según año de publicación



Del mismo modo, en relación a la autoría de la producción escrita ubicada para la presente investigación existe igual concentración de textos publicados por las organizaciones femeninas y organizaciones privadas y públicas del país. Sin embargo es importante señalar el avance investigativo realizado por parte de las instituciones académicas en especial la Universidad de Los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana

Gráfico 5. Autores de la producción escrita



3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las **Técnicas e instrumentos** implementados para la investigación documental son:

La **Reseña Analítica Estructurada**, definida por Guillen, (1987:56) como un instrumento de procesamiento eficaz de la información, serán implementadas describir de manera general el perfil y contenido de las fuentes. En desarrollo de la investigación la Reseña analítica se denomino Reseña Analítica de Violencia de Género y Reparación Integral (RAVGRI). (Ver anexo F).

La **Ficha Temática** según Cifuentes, (2006) Contiene información seleccionada de acuerdo con temas y subtemas pertinentes para describir la producción de conocimiento sobre temáticas específicas. De acuerdo a la presente investigación, estos temas y subtemas surgen del cuadro categorial, el cual se fundamenta en los objetivos y referente teórico

La importancia de la ficha temática radica en complementar la información descrita en la Reseña Analítica (RAVGRI), pues permite la profundización de los contenidos específicos y pertinentes para la investigación. Otra ventaja, es que permite registrar textualmente los contenidos de los autores y posibilita la conceptualización, fundamentación, establecimiento de categorías nuevas, así como cruces sugerentes. En desarrollo de la investigación la Ficha Temática se denomino Ficha Temática de Violencia de Género y Reparación Integral (FTVGRI). (Ver Anexo H).

3.7 FASES DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

La presente investigación documental se fundamentó a través de la asesoría por parte de la Trabajadora Social Luz Marina Pava Barbosa, que se registró a través de 25 protocolos que evidencian el contenido temático de cada sesión durante seminario de Trabajo de

Grado I y II; la realización de protocolos permitió para el grupo investigador el seguimiento a la investigación misma, así como la evaluación individual y colectiva de compromisos que contribuyeron a evidenciar los avances de la investigación que se estructuró a través de las siguientes fases. (Ver cuadro 5).

Adicionalmente, es importante mencionar que durante el desarrollo de la investigación, el equipo realizó un seguimiento de gastos realizados en cada una de las actividades propuestas para la consecución de objetivos. (Ver anexo J.)

Primera Fase

Esta primera fase contempla la construcción de la propuesta de investigación, materializada en la realización del anteproyecto para lo cual se tuvo en cuenta: la selección del tema, el rastreo investigativo y documental en bibliotecas y hemerotecas de Universidades y Unidades Académicas de Bogotá, entre ellas, los Andes, Católica, Externado de Colombia, Gran Colombia, Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, Manuela Beltrán, Piloto de Colombia, Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Santo Tomas, en las que se ubicó 30 documentos (trabajos de grado y libros) que permitieron la identificación de vacíos de conocimiento y por ende la construcción de antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, justificación.

Segunda Fase

Una vez realizada la búsqueda, localización y adquisición del material investigativo, bibliográfico y documental relacionado con el derecho a la reparación integral según la Ley 975 y violencia de género hacia las mujeres en el marco del conflicto armado, se identificaron los principales autores, entre los que se destaca la producción bibliográfica y avance conceptual en relación con el tema de investigación de autores como Joan Scott, Mara Viveros Vigoya, Donny Meertens, Amani El Jack, Louis Joinet y ACNUR, que permitieron la construcción de referentes teórico-conceptuales y legal.

Tercera Fase

Esta fase permitió al equipo investigador definir el proceso de la investigación documental, fundamentado en el avance conceptual de autores tales como: Germán Vargas Guillen, Hugo Cerda y Laura Cázares Hernández y en coherencia con el referente teórico-conceptual se diseñó el cuadro categorial, el cual permitió definir las principales categorías, subcategorías, dimensiones y subdimensiones. (Ver cuadro 3.).

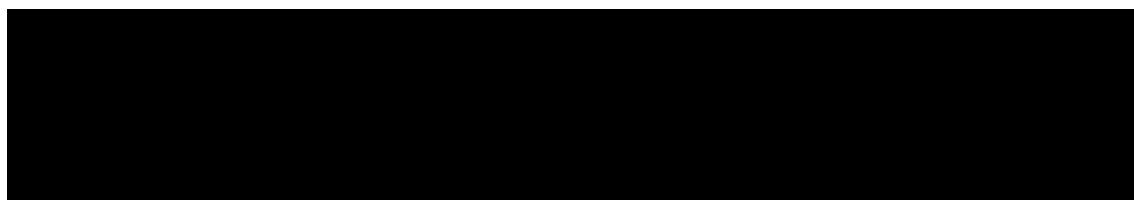
Cuadro 3. Cuadro Categorical

Cuadro Categorical			
Categoría	Subcategorías	Dimensiones	Subdimensiones
VIOLENCIAS DE GENERO	Manifestaciones de violencia	<ul style="list-style-type: none"> • Sexual • Física • Psicológica 	Influencia: <ul style="list-style-type: none"> • individual • familiar • comunitaria.
	Desarrollo del derecho a la reparación.	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones emprendidas por parte del Estado. • Consideraciones del derecho a la reparación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Institucionales • Académicas

Seguidamente se elaboraron los instrumentos de recolección de información (RAVGRI y FTVGRI), en conjunto con el correspondiente instructivo. (Ver anexo G e I) La validación de dichos instrumentos se determinó a partir de la prueba piloto, en la cual se recolectó la información de 10 documentos escogidos aleatoriamente por el equipo investigador.

Paralelo a lo anterior y de acuerdo a los criterios de selección mencionados anteriormente, se efectuó la clasificación de la producción escrita hallada en diversos centros de documentación de Bogotá e inició la recolección de información a través de los instrumentos (Ver anexo K), y posteriormente se efectuó el procesamiento y ordenamiento de la información, para lo cual se diseñó una matriz en Microsoft Office Excel, permitiendo realizar una lectura vertical, horizontal y transversal de la información. (Ver cuadro 4.)

Cuadro 4. Matriz Procesamiento y Ordenamiento de la Información



IV Fase

En esta última fase, con el fin de responder los objetivos planteados y construir el capítulo de resultados, se procedió a analizar e interpretar la información consolidada en la matriz de procesamiento y ordenamiento, iniciando con la codificación del contenido más relevante que posteriormente permitiera realizar el correspondiente análisis.

Seguidamente partiendo de cada uno de los análisis realizados por cada integrante del equipo investigador, se procedió a su consolidación y la redacción de resultados, que finalmente se enriqueció con el aporte analítico del equipo y la recopilación, lectura, discusión respecto al tema de investigación de publicaciones ubicada en revistas, boletines, prensa nacional entre otros.

Cuadro 5. Fases de la Investigación Documental

FASES DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	
PRIMERA FASE Elaboración propuesta de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Selección del tema • Rastreo bibliográfico, documental y virtual. • Consulta de información en Unidades Académicas y Universidades de Bogotá • Elaboración de antecedentes, justificación, problema, vacíos de conocimiento, objetivos.
SEGUNDA FASE Elaboración Referentes Teórico y normativo	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión documental e identificación de autores pertinentes para la temática de investigación. • Elaboración del referente teórico y marco legal.
TERCERA FASE Diseño Metodológico	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de cuadro categorial • Propuesta metodológica: tipo de investigación, elaboración de instrumentos, validación de instrumentos, técnicas e instrumentos, elaboración de matrices. • Determinación de fuentes secundarias de acuerdo a los criterios establecidos. • Procesamiento y ordenamiento de la información.
CUARTA FASE Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis e interpretación de las categorías y subcategorías de indagación. • Redacción del informe final. • Entrega documentos a jurados. • Corrección y arreglos finales. • Sustentación de la investigación. (Ver anexo L) • Entrega de documento final a la Facultad.

4. RESULTADOS

En relación al cumplimiento de objetivos, se expondrán los hallazgos a partir de la producción escrita, escogida de acuerdo a los criterios de selección, durante el periodo 2003-2007, relacionados en un primer momento con las manifestaciones de las violencias de género en el marco del conflicto armado colombiano; en un segundo lugar, el desarrollo del derecho a la reparación integral a partir de la expedición de la Ley 975 de 2005 y por último el análisis de éstas categorías.

4.1. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

Las manifestaciones de violencias de género en contra de las mujeres son entendidas como aquellas acciones violentas que se ejercen con la intención de imponer o preservar el poder hacia este grupo poblacional por su condición misma de género, que abarca tanto características biológicas como de orden social y que a su vez indican en el ejercicio de las diversas libertades y en las dinámicas individuales, familiares y comunitarias; Generalmente estas manifestaciones son atribuibles a los actores del conflicto armado (grupos al margen de la ley y la fuerza pública) que atentan a la integridad, bienestar y calidad de vida de las mujeres.

De este modo, la investigación documental permite evidenciar que la producción escrita que aporta a esta categoría de indagación se constituye entre otros, por la producción de conocimiento publicada anualmente en informes de organizaciones feministas nacionales de Derechos Humanos, entre ellas la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Ruta Pacífica, Red Nacional de Mujeres, Corporación SISMA Mujer, las cuales convergen en la intención de dar a conocer, a través del trabajo de campo y utilización de fuentes secundarias de organismos internacionales, la grave situación de vulneración de Derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado, también pretenden sensibilizar a la población civil, a las autoridades correspondientes, entre otros actores sociales-políticos y representar a quienes por la dinámica del conflicto están invisibilizados.

En relación con la publicación de documentos es evidente el avance progresivo de las publicaciones durante el periodo 2003-2007, concentrándose mayor cantidad de producción escrita, particularmente informes durante el año 2006 y 2007.

De igual forma organizaciones internacionales con presencia en Colombia, como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Desarrollo para las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Amnistía Internacional, han publicado informes y boletines con el fin de denunciar internacionalmente el panorama crítico de las mujeres colombianas, revelar las violaciones en el marco del conflicto armado de los Derechos

humanos y el Derecho Internacional Humanitario y recomendar acciones y/o estrategias oportunas que propendan por su reivindicación. Se considera importante mencionar que en la mayoría de los documentos nacionales se retoma con frecuencia los trabajos realizados por Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

en este primer momento se enuncia las prácticas cometidas hacia las mujeres identificadas en tres grupos, *mujeres líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos; mujeres campesinas, afrocolombianas e indígenas; niñas, adolescentes y jóvenes campesinas e indígenas*; y su influencia en las dimensiones individual, familiar y comunitaria, así como los principales actores armados que la ejercen.

4.1.1 Manifestaciones físicas de violencias de género. Esta tipología de violencias se comprende como aquellas acciones dirigidas directamente sobre el cuerpo de las mujeres, que efectuadas por los actores armados con la intención de imponer o preservar el poder, irrumpen en su movilidad física de manera parcial o totalmente; así el cuerpo femenino entre otros es objeto de atentados, masacres, mutilaciones, quemaduras, golpes que pueden en algunos casos propiciar la muerte. Por otra parte, también comprende las acciones que inciden en los bienes o estructuras materiales que poseen o habitan las mujeres y sus familias; de esta manera la mayoría de estas acciones generan la destrucción, pérdida o despropiación la vivienda y sus bienes muebles e inmuebles.

En este primer momento se enuncia las prácticas cometidas hacia las mujeres identificadas en tres grupos, *mujeres líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos; mujeres campesinas, afrocolombianas e indígenas; niñas, adolescentes y jóvenes campesinas e indígenas*; y su influencia en las dimensiones individual, familiar y comunitaria, así como los principales actores armados que la ejercen

En este sentido, se evidenció en un primer momento que éstas manifestaciones son efectuadas a mujeres líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que se desenvuelven en ámbitos de participación social, comunitaria y sindical¹². Así, quienes toman la decisión de participar se ven sometidas a agresiones físicas entre ellas, secuestros, detenciones arbitrarias, realizadas particularmente durante retenes e impidiendo la movilidad de las mujeres, así mismo se presenta homicidios, asesinatos selectivos, atentados, desapariciones forzadas, muertes por asfixia mecánica, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

Una mujer de 29 años (...) Ella trabajaba en la finca las palmeras y se desempeñaba como dirigente sindical del sector bananero. antes de su homicidio había recibido amenazas que, a través del correo

¹²Desde producción escrita las principales organizaciones a las cuales se hace referencia son: Organización Femenina Popular OFP, la Fundación Santa Rita, La Red de Mujeres en Acción Hacia el Futuro, Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar, Asociación Campesina La Conquista, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (Anmucic), Asociación de Institutores del Cauca y Antioquia, Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales de Santander, Mesa de Bogotá del Tribunal Nacional de Mujeres y DESC, Organización Indígena Kankuama (OIK), Consejo Nacional de Indígena de Paz, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), Organización de los pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica (OPIAC), Fundación de Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), Casa de la Mujer en Bogotá.

electrónico, les llegaron a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. (CNRR, 2007: 118)

...“Se denunciaron las amenazas y torturas de una periodista perteneciente a la Organización Femenina Popular (OFP), a quien los paramilitares le habrían cortado el pelo y quemado los pies con agua caliente, en enero [de 2003] en Barrancabermeja (Santander)”. (Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, 2006: 21)

Además, cabe destacar que aunque las mujeres líderes son objetivo directo de violencia física, su red familiar (hijos, esposos) y vínculo social (directivas, integrantes y colaboradores de la organización) también son involucrados indirectamente en dichos sucesos. Igualmente se evidencia que los actores armados que ejercen este tipo de violencia en su mayoría son los paramilitares, seguidos por las FARC, con la clara intención de desintegrar la organización, sus procesos y desestabilizar la incidencia política de dicho tipo de organizaciones.

Las manifestaciones físicas de violencias de género influyen de manera individual y familiar sobre la vida de las mujeres líderes, sindicales y defensoras de Derechos Humanos, pues muchas de ellas se ven obligadas a desplazarse de sus territorios, abandonar su liderazgo y participación política y en algunos casos presenciar la desintegración de su familia; una de las influencias en los procesos comunitarios es que este tipo manifestaciones tienden a desestabilizar la organización conformada, disminuye la confianza por parte de los integrantes, colaboradores/as o beneficiarias/os de las organizaciones que intermedian entre el Estado y las víctimas en la reivindicación de sus derechos.

Las mujeres sindicalizadas, más que los hombres, suelen perder la autoestima con el desplazamiento porque generalmente abandonan la actividad sindical y pierden el liderazgo social que con tanta dificultad habían logrado. (Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, 2006: 21)

Así mismo, las mujeres campesinas, afrocolombianas e indígenas (desde la producción escrita las principales etnias que denuncian manifestaciones de violencias de género son: Wiwa, A nasa-paes, Kankuama, Makaguan, Awas, Betoyes), también son víctimas de manifestaciones de violencia física en el marco del conflicto armado, son receptoras de masacres, desapariciones forzadas, agresiones físicas, lesiones por la explosión de minas antipersona, homicidios con arma de fuego y en algunos casos sus cuerpos son mutilados, antes de ser desaparecidas y ejecutadas, son obligadas a realizar tareas domésticas e involucra en ocasiones a mujeres en estado de gestación. También son objetivo militar quienes por sospecha de haber socializado con integrantes del bando contrario sufren castigos, torturas, tratos crueles y en algunos casos son forzadas a llevar marcas en su piel.

(...) Con una navaja o cuchillo le hicieron marcas en las piernas, en los senos y en las nalgas. Le marcaron el brazo izquierdo con las siglas AUC (...) (Iniciativa Mujeres por la Paz, 2005:9)

(...) Era una mujer cabeza de hogar, (...) Mi incidente sucedió cuando pisé una mina sembrada a la orilla del camino por donde me tocaba pasar. Como ustedes se darán cuenta, perdí una pierna, me fracturé la otra y además tengo problemas en un ojo y un oído. También he sufrido de los nervios. (Roldán, 2007:57)

Sumado a lo anterior, dichas mujeres son testigos de los asesinatos, masacres, desapariciones forzosas de sus esposos, compañeros, hijos/as, situación que con lleva a que ellas queden viudas y sus hijos huérfanos, de esta manera deben asumir jefatura femenina y sus hijos iniciar su vida laboral a temprana edad.

"Todo cambió para mí. Me tocó vender la finca para pagar los gastos del hospital donde me atendieron. A mis hijos, aún siendo niños, les tocó salir a trabajar para ganarse la vida. Atrás quedaron mis sueños de verlos salir adelante" (...) (Roldán, 2007:58)

"Soy una de las víctimas de Machuca, del oleoducto que explotaron. Nosotros antes del incidente éramos personas normales en nuestros hogares. Hoy existen en Machuca muchas madres viudas y niños huérfanos". (Roldán, 2007:56)

(...) "El conflicto armado transforma el papel de la mujer en la dinámica familiar, puesto que se ve en la obligación de asumir nuevos roles adicionales a los tradicionales, por razones de desempleo o emigración forzosa de su esposo o compañero, viudez, abandono y desestructuración del núcleo familiar". (Presidencia República de Colombia, 2003: 60-61)

Por otro lado, cuando las mujeres sobreviven a las manifestaciones físicas de violencias de género en ocasiones con influencias físicas y/o desestructuración familiar por pérdida de un integrante, se ven obligadas a desplazarse de sus territorios de origen, con la intención de salvaguardar su vida y la de sus hijos, conservar la unidad familiar, buscar nuevas formas de subsistencia y reanudar sus proyectos de vida. Paralelo a ello, prevalecen los atentados que destruyen total o parcialmente la infraestructura comunitaria y habitacional de las mujeres, así como el territorio productivo donde se desarrollan labores agrícolas tradicionales y aquellos procesos que configuran la identidad rural, arraigo territorial y que inciden en el fortalecimiento o detrimento de las relaciones familiares y sociales.

Con el mismo propósito, surge otra estrategia de poder que se evidencia en el marco del conflicto armado, es el confinamiento ejercido por los actores armados, a través del encierro o aislamiento de poblaciones controlan su movilidad, los recursos económicos, oferta y suministro de alimentos; éstas circunstancias agudizan la situación de las mujeres en contextos rurales por cuanto, en algunos casos, ellas como principales encargadas de labores domésticas tienen que enfrentarse a la carencia de alimentos, desnutrición de sus hijos e hijas y de ellas mismas. Todo esto influye en la vida cotidiana de las mujeres e integrantes de su familia dado que se coarta el ejercicio de libertades, transforma roles y vulnera derechos de alimentación, educación, salud, trabajo entre otros.

Angie tenía tres años (...) Amaneció muerta el día de San Ignacio, sábado 31 de julio (...) La abuela, María Adela, de 40, clamaba desde las vísceras que le dejáramos ver a la niña. Al verla muerta se desmayó. Angie murió de infección intestinal. La noche del viernes no había medicina en ninguna parte. La abuela traía dos gallinas para venderlas en Puerto Matilde y pagar el viaje hasta el hospital de Yondó a dos horas de lancha. La enfermedad no dio tiempo. Por la cuenca del Cimitarra está prohibido tener droga de farmacia porque podría llegar a la guerrilla. (Mesa de Trabajo "Mujer y Conflicto Armado", 2004:37)

Precisamente en la vulneración de derechos, el derecho a la salud de las mujeres, se menoscaba dado que por ejemplo en el acceso a anticonceptivos incide en el libre ejercicio de la sexualidad; la atención y procedimientos básicos a gestantes y sus hijos son nulos y una complicación básica puede poner en riesgo la vida de ambos; también se restringe la movilización a hospitales de personas que requieren atención, los grupos armados controlan el ingreso de personal médico a áreas rurales, aumentando de esta manera el aislamiento y atención básica a población tradicionalmente marginada.

De otra parte, la situación de niñas, adolescentes y jóvenes campesinas e indígenas no es ajena al panorama descrito anteriormente, pues, son víctimas de asesinato, reclutamiento, homicidio, tortura, trabajo forzado, secuestro, impacto con armas de fuego en una de sus extremidades, confinamiento, riesgo inminente por las minas antipersonales y mutilación de su cuerpo ejercido por parte de los actores armados, entre ellos la fuerza pública y los grupos al margen de la ley (FARC, Paramilitares).

La comunidad indígena de Flor Amarillo, Arauca, denuncia en el 2003 fueron asesinados 4 indígenas, entre ellos una mujer embarazada de 16 años. En la comunidad de Parreros fueron asesinados cuatro indígenas y violadas cuatro niñas de 11, 12, 15 y 16 años (...) (Mesa de Trabajo "Mujer y Conflicto Armado", 2004: 88)

"En las Delicias [los paramilitares] mataron a una niña de 10 años, la degollaron y mutilaron. Fue por los días que mataron a mi hija. A otra muchacha indígena de 16 años le cortaron los senos por esos mismos días. Querían hacer notar su presencia. Todas eran niñas indígenas. (Mesa de trabajo "Mujer y Conflicto Armado", 2006:28)

4.1.2 Manifestaciones sexuales de violencias de género. Son comprendidas como las manifestaciones que recurriendo a la violación de la intimidad sexual y autonomía del cuerpo femenino, inciden en el libre ejercicio de la sexualidad que en el conflicto armado degradan la condición de ser mujer; así la dignidad es demeritada por los directos responsables de estos hechos.

La producción escrita permite evidenciar que ésta manifestación se ejerce en contra de niñas, niños, mujeres, jóvenes y adultas entre ellas campesinas, afrocolombianas, indígenas y profesionales del sector salud.

En esta subcategoría de análisis fue de vital importancia las conceptualizaciones que desde los testimonios y relatos de mujeres de diferentes zonas del país, organizaciones femeninas e instituciones no gubernamentales describen este tipo de manifestaciones, entre ellas se encuentran: violación pública, acoso sexual, abusos sexuales, chantajes sexuales, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos, violencia sexual, desnudez forzada, embarazo forzado, aborto forzado, anticoncepción forzada, mutilación sexual, prostitución forzada y esclavitud sexual, ejercidas principalmente por los Paramilitares, seguido de la Fuerza Pública y las FARC.

(...) "dos niñas de 16 y 17 años fueron abordadas por un grupo de 10 miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional (...) las trasladaron hasta las afueras del municipio, en donde el grupo de soldados les quitó la ropa y las violó". (Mesa de Trabajo "Mujer y Conflicto Armado", 2005:88)

Paralelo a ello, las prácticas de índole sexual cometidas por los diferentes actores armados se desarrollan en ámbitos tanto privados como públicos; en relación con el ámbito privado se evidencia que los actores armados irrumpen de manera violenta en los hogares de las mujeres. Por otro lado, en el ámbito público, en algunas ocasiones la intimidación sexual de las mujeres es expuesta durante las prácticas sexuales, en especial la violación sexual, pues éstas se desarrollan en presencia de otras mujeres, integrantes de su familia (esposo, hijos e hijas), o de los grupos armados y comunidad; también se observa casos en los que estas prácticas no sólo son cometidas por un sujeto, sino que involucra simultáneamente a un grupo de hombres donde una mujer es la víctima.

(...)“Cogieron a la señora y a una hija y las violaron delante del esposo y los otros hijos. Ella dice que: “poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino hacia la muerte, porque si yo hago eso, no puedo volver a salir del pueblo” (Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”, 2006:16)

(...)“Era de noche. Llegaron dos hombres armados que vestían prendas militares, camuflado, armas, y se identificaron como paramilitares. Se llevaron a mi esposo fuera de la casa y todo el tiempo le apuntaron con el arma. La niña lloraba. Yo cerré la puerta. Uno de los hombres se devolvió y gritó que abriera la puerta o la tumbaba el hombre me sacó de la habitación y me llevó al corredor para interrogarme. Allí, en un banco que hay en el corredor, me amenazó con matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me forzó. Me violó. Luego me dijo que me vistiera y también dijo: “Aquí no pasó nada. Las mujeres, al fin y al cabo son para esto”. (Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, 2006: 26)

Sumado a esto, las prácticas sexuales de violencias de género en los ámbitos privado y público, se ejercen en situación de aislamiento, ya sea a través del secuestro o de la implementación de la estrategia del engaño, las mujeres se ven sometidas a la violación sistemática, esclavitud sexual, prostitución forzada, además de ser obligadas a realizar trabajo forzado y funciones domésticas.

(...)“también tenemos testimonios de mujeres que han sido tomadas como esclavas sexuales; han sido llevadas a fincas, han sido violadas en repetidas veces y se les ha obligado a hacer tareas domésticas para los actores armados, como cocinar y otras. (Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, 2006: 25)

(...)“tengo 21 años y trabajaba en un bar. Un día llegó un miliciano de las FARC y nos propuso a mí y a otras compañeras si queríamos viajar para trabajar con los muchachos. Me pidieron todos mis documentos, porque ellos dicen quién va y quién no. Me prometieron que ganaría tres millones de pesos en tres meses y que después podría volver a Medellín. Me mandaron en avión y todo a lo full con otras como yo. El primer día nos han mostrado el lugar donde viviríamos y trabajaríamos pero el asunto se complicó cuando vi la fila de hombres que me tocaban, sucios y con unas pintas que me daba asco (...) Me obligaron a acostarme con todos ellos y los que llegaron”(…) (Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, 2006: 27)

Lo anterior permite corroborar lo expuesto por la producción escrita, que describe la existencia de una serie de prácticas sexuales que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres, lo cual tiene una connotación de estrategia de guerra que pretende debilitar al enemigo, demostrar su incapacidad para protegerlas y acumular trofeos de guerra con los cuerpos de las mujeres; de esta manera las prácticas de violencia sexual influyen en la desintegración familiar, dado que cuando sus compañeros o esposos conocen de los hechos, ya sea por el testimonio de ella, por lo que presenciaron o por comentarios de la comunidad, se sienten avergonzados y humillados, lo cual tiene relación con el

representatividad de la cultura patriarcal, que simboliza a la mujer en términos de exclusividad, que en este contexto se agudiza o genera nuevos conflictos, se transforman patrones de comportamiento conllevando en algunas ocasiones a que los hombres abandonen su hogar, lo cual implica la asunción de nuevas responsabilidades para las mujeres, entre ellas la jefatura femenina.

"En Domingodó, los maridos huyeron al monte y entre 5 y 10 hombres violaron mujeres de 19 a 30 años. Hay dos matrimonios separados. Los maridos quedaron decepcionados de las mujeres a las que violaron, se avergonzaron de ellas. Uno de ellos se fue. Ellas se sentían avergonzadas. Las otras mujeres que supieron de las violaciones no querían llegar al casco urbano por temor de que les pasara eso. Huyeron al monte. Las FARC las presionaron para que huyeran al monte". (Mesa de Trabajo "Mujer y Conflicto Armado", 2003:27)

4.1.3 Manifestaciones psicológicas de violencias de género. Es aquella que a través de acciones intencionadas, busca controlar la autonomía femenina a través de la alteraciones de la subjetividad, emocionales, sociales, culturales.

Desde la producción escrita se evidencia que los actores del conflicto armado colombiano, principalmente los grupos paramilitares seguidos por las FARC ejercen sobre las mujeres prácticas de terror, manipulación, presión, hostigamiento, sometimiento, seducción, intimidación, coerción, asedio, chantaje, señalamiento, amenazas de muerte hacia ellas o familiares, humillaciones públicas y degradantes, estrategias de control en las relaciones afectivas y de comportamiento, así como la imposición de reglas estéticas y burlas; en algunos casos existe una combinación en la utilización de dichas prácticas.

(...) "Para ese momento, no sólo estaba amenazada de las FARC. Los paramilitares habían llamado a mi casa en Valledupar a decir que debía ir a Las Raíces, una vereda de Pueblo Bello, a rendirles una declaración sobre lo sucedido. Y que, si no lo hacía, era guerrillera" (...) (CODHES, 2003:40)

(..) en algunas zonas del país, la guerrilla y los paramilitares imponen las reglas estéticas, particularmente de las mujeres, en lo que atiene a la longitud del pelo, el uso de pantalones descaderados entre otros. (Red Nacional de Mujeres, 2003:23)

En el mismo sentido, los actores armados suelen utilizar el sentimiento de madres, hermanas, novias o compañeras para amedrentar, presionar y obligarlas a transmitir información que supuestamente poseen. Se siembra el temor y la angustia a partir de amenazas asociadas a la seguridad de sus seres queridos. En situaciones contrarias a la anterior, estos actores armados con el objetivo de mantener el control territorial ejercen sobre la vida cotidiana e íntima de las mujeres una serie de prácticas que buscan regular las relaciones sociales.

(...) "estábamos en el sitio de asamblea permanente, ellos nos decían que teníamos que avisar si la guerrilla estaba o no, nos decían que su hijo ya nos contó todo, ya lo tenemos, todo mentiras, sólo para atemorizarlo a uno". (Lara, 2003:42)

Cuando hay infidelidad o algo, ellos [paramilitares] las castigan [...] la gente siente que 'ellos sí vinieron a poner orden [...] Por ejemplo, hay una que la sacaron, la amarraron, le pusieron una cartulina escrita por

detrás "le soy infiel a mi marido" y la pusieron a caminar por el barrio. (Mesa de trabajo "Mujer y Conflicto Armado", 2006:21)

En algunos casos como resultado de la manipulación o seducción ejercida por parte de los actores armados, hacia las jóvenes, la producción documental, hace referencia a la presencia de embarazos y posterior abandono.

(...) "suele suceder que "cuando llegan los ejércitos toman a las niñas, las enamoran, las hacen sus novias, las utilizan y luego las dejan; se han dado casos en que algunas de estas jóvenes han resultado en embarazo y han sido abandonadas dejándolas solas con la responsabilidad de ese hijo que viene en camino. Igualmente, se tiene la sospecha de que producto de estos relacionamientos se podrían haber incrementado los casos de las enfermedades de transmisión sexual". (Lara, 2003:42)

"Las mujeres jóvenes (...) son manipuladas por los actores armados para convertirlas en sus amantes o compañeras, perdiendo toda posibilidad de expresión propia. Cuando quieren mantenerse al margen y se resisten a cualquier tipo de circulación como cuando son llamadas para la realización de oficios domésticos, su vida queda comprometida, así como cuando son utilizadas para desestabilizar al enemigo". (Presidencia República de Colombia, 2003 49-50)

Igualmente, el asedio o seducción permanente por parte de los actores armados, en especial los paramilitares, conlleva al desplazamiento de población femenina joven, con el fin de proteger su integridad.

(...) "ellos [los paramilitares] las asedian tanto, tanto, que aquí hay bastantes niñas desplazadas porque no quieren estar con los paramilitares, como antiguamente no quisieron estar con la guerrilla (...) algunas niñas han tenido que desplazarse debido a ese tipo de situaciones". (Mesa de trabajo "Mujer y Conflicto Armado", 2006 27)

Como influencia de las manifestaciones psicológicas de violencias de género, se evidencia que éstas repercuten de manera individual, en la subjetividad de las mujeres y trascienden a la dimensión familiar de las mismas. Se altera el bienestar emocional de ellas, llevándolas a experimentar temor, desconfianza, persecución continua con incidencia en la pérdida de autonomía, expresada en la toma de decisiones referidas al establecimiento de relaciones afectivas, políticas y comunitarias.

4.2 DESARROLLO DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 975 DE 2005

La producción escrita que constituyó esta categoría de indagación se consolidó por libros, informes, artículos de revista especializada e investigaciones publicados principalmente en el año 2006 y 2007, por instituciones gubernamentales, ONG's y académicas, entre otras, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Procuraduría General de la Nación, Fundación Social, Universidades Javeriana, de los Andes y Externado de Colombia; todas ellas, en su mayoría convergen en la necesidad de contemplar una serie de elementos de análisis que fueron o no considerados en la formulación e implementación de la Ley y que orientan e influyen en su impacto.

Para dar cumplimiento al segundo objetivo de la presente investigación, referido al desarrollo del derecho a la reparación integral a partir de la expedición de la Ley 975 de 2005, a continuación se presentarán los hallazgos, organizados en tres categorías; la primera se refiere a las acciones emprendidas por parte del Estado luego de la expedición de la Ley; la segunda abarca las consideraciones institucionales y académicas, en relación a la reparación integral y por último el significado de reparación que las víctimas y organizaciones poseen.

4.2.1 Acciones emprendidas por parte del Estado. Desde la producción escrita a partir de la expedición de la Ley 975 de 2005, la principal tendencia en relación a las acciones efectuadas por parte del Estado enfatiza en la creación del Fondo para la Reparación de víctimas y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, su proceso de conformación, sus principales funciones y retos, así como el balance de su plan de trabajo.

En relación con la creación del Fondo para la Reparación de Víctimas, la Ley determina que estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras (Art. 54 Ley 975).

A pesar de la creación del Fondo para la Reparación de Víctimas, desde la perspectiva institucional y académica se cuestiona el hecho de que éste se componga de recursos provenientes del presupuesto nacional y no fundamentalmente de los directos responsables de los delitos cometidos, en este sentido se traslada la responsabilidad civil de quienes han producido los daños que son necesarios reparar, a los ciudadanos y ciudadanas que no han causado daño alguno; además se considera que los grupos al margen de la ley cuentan con recursos suficientes, para reparar a las víctimas y no sólo deben contribuir a ésta con bienes ilícitos sino incluyendo su patrimonio general, tampoco existe claridad en el monto de bienes que deben devolver los desmovilizados.

Con el mismo propósito, dado que las reparaciones dependen de los bienes y recursos entregados por los desmovilizados, es indispensable la voluntad de éstos en la declaración y entrega de bienes, no obstante los ex-jefes paramilitares manifiestan que a pesar que han avanzado en la entrega de bienes lícitos e ilícitos, los recursos poseídos en relación con el cálculo económico de reparación no son suficientes para indemnizar; sin embargo el Fondo no cuenta con un sistema de registro que permita controlar los bienes y tierras usurpadas por los grupos al margen de la ley. Al respecto “el Movimiento de Víctimas reitera su compromiso participar (...) una propuesta para la elaboración de un catastro alternativo que reúna información sobre los bienes, tierras y territorios que fueron usurpados a las víctimas a través del terrorismo de Estado”. (Fundación Social, 2007:171)

De la misma forma, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue creada mediante la Ley 975 de 2005, en octubre de ese mismo año, está presidida por el Vicepresidente de la República, e integrada por el Procurador General de la Nación, el

Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Hacienda y crédito público, el Defensor del pueblo; dos representantes de organización de víctimas, el director de Red de Solidaridad Social, y cinco personalidades designadas por el Presidente de la República, entre las cuales deben haber dos mujeres.

Por ende las funciones de la CNRR desde su creación están referidas a solicitar a las autoridades competentes su intervención o la realización de las investigaciones correspondientes, según sea el caso.

En relación con el derecho a la reparación, la CNRR y las autoridades administrativas exhortarán a los desmovilizados, para que lleven a cabo actos procesales de restitución de bienes directamente a las víctimas, del mismo modo debe diseñar primero, un Programa de Restitución de Bienes el cual servirá de base para la labor de las autoridades nacionales y locales competentes; segundo diseñar un mecanismo idóneo, transparente y ágil para la recepción de solicitudes, peticiones y/o quejas de las víctimas, la CNRR las remitirá a las instituciones o autoridades competentes y realizará el seguimiento al mismo trámite.

De otra manera, la CNRR se expone a los siguientes retos: garantizar la participación de las víctimas en los procesos judiciales y de reparación; evaluar periódicamente la labor de reparación a las víctimas, para ello podrá formular recomendaciones a las instancias correspondientes que ayuden a la adecuada ejecución de la Ley 975, incluso, sugerir al gobierno o a las organizaciones políticas conmemorar, homenajear y exaltar a las víctimas de los grupos al margen de la ley. Por último recomendar criterios de reparaciones al Fondo de Reparación a las Víctimas, y coordinar las comisiones regionales para la restitución de bienes.

De otra parte, los hallazgos referidos al balance de acciones emprendidas por la CNRR, se articulan particularmente a la función de divulgación de derechos de las víctimas, a partir de dos estrategias desarrolladas; la primera, utiliza los medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, lográndose implementar por ejemplo, el programa emitido por el canal institucional “*Nunca Más*”¹³, grabaciones en videos informativos, periodísticos y documentales, cuñas informativas en programas radiales, publicación y diseño de documentos, entrevistas, comunicados y/o informes en la página web; como segunda estrategia se ubica el trabajo de campo liderado por la CNRR (algunas organizaciones que han participado como asistentes en el trabajo de campo son: ICBF, Veedurías Departamentales, comisarías de Familia, personerías Municipales, policía Nacional, OIM, ONU, Arquidiosis, Misión de apoyo al proceso de paz de la OEA (MAPP-OEA) entre otros), que busca incorporar un enfoque de género a través de la labor de difusión, información, asesoría, asistencia legal y profesional especializada.

Lo anterior se realiza en jornadas de capacitación, consultas sociales, actividades de difusión de la Ley, seminarios, encuentro, talleres (talleres realizados en diferentes ciudades, con la participación de representantes de organizaciones indígenas y

¹³ Durante el desarrollo de la presente investigación el equipo investigador identificó los siguientes programas de televisión relacionados con el tema: La hora de las Víctimas, Es tiempo de la verdad.

afrocolombianas, y funcionarios del Ministerio Público), reuniones con víctimas y con organizaciones que representan sus intereses; en lo que respecta a la restitución de los territorios se adelantan consultas informativas particularmente a población afrocolombiana e indígena.

Paralelo a las estrategias de divulgación mencionadas anteriormente, es conveniente aclarar que existe un avance conceptual por parte de la CNRR en relación con la noción de víctima y reparación integral y en la determinación de los patrones de reparación que serán objeto de política de reparación.

Por este motivo, la CNRR ha elaborado, una serie de documentos, entre ellos: *la recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa*, que refleja la filosofía política y la misión estratégica de la Comisión respecto a las reparaciones, orienta tales recomendaciones de manera específica a las autoridades judiciales involucradas en el cumplimiento de la Ley 975 de 2005. También sugiere la utilización de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional con el fin de obstaculizar casos de impunidad que incidan en la no reparación de las víctimas.

El avance conceptual se evidencia en el documento *propuesta de un Programa Nacional de Reparaciones (PNR)*, que busca en primer lugar, alcanzar cobertura amplia e integral, para beneficiar a un número mayor de víctimas en un tiempo relativamente corto, lo que a su vez tendrá un efecto reparador mayor. En segundo lugar, busca un trato igual para todas las víctimas del conflicto interno ya que a diferencia de la Ley de Justicia y Paz -que solo incluye a las víctimas de los grupos armados ilegales que se cobijen al proceso de justicia y paz-, la reparación administrativa incluiría como beneficiarias a todas las víctimas, independientemente de quien haya sido el actor responsable de las violaciones a los derechos humanos. En tercer lugar, su implementación disminuye la asimetría que existe entre el trato dado a los desmovilizados y a las víctimas. En cuarto lugar, permite elaborar una estrategia de implementación de mediano y largo plazo, posibilitando una planificación de sus impactos y de los recursos necesarios para su ejecución.

Por último, se encuentra el *plan piloto de Reparación*, que desde la producción escrita no emite mayor información acerca de su impacto, principales ciudades o departamentos vinculados.

Es importante destacar que la CNRR reconoce que los procesos de reparación deben incluir una perspectiva de género en todas sus áreas, con este fin, desde el 2006 se creó el Área de Género y Poblaciones Específicas, cuyo objetivo es promover la participación de las mujeres víctimas en el proceso de Justicia y Paz. En este sentido, dicha área considera importante el análisis de la violencia sexual y de género en medio del conflicto, para poder lograr la no repetición, así como desarrollar un mecanismo de atención y reparación específica para las/os niñas y niños que nacieron como producto de las violaciones, los cuales, al igual que sus madres en muchos casos sufren estigmatización social. (CNRR, 2007:127)

Del mismo modo la conformación de la Red Nacional de Atención a víctimas, se constituye en la principal iniciativa que con apoyo de entidades públicas¹⁴, privadas, las víctimas, las universidades y la comunidad internacional, busca la recuperación de las víctimas desde su lugar para un reconocimiento de sus necesidades a través de mesas de trabajo municipales, regionales y nacionales.

Desde la producción escrita de instituciones gubernamentales se identifican otras acciones emprendidas por parte del Estado, organizaciones de relevancia en el proceso y de garantía del derecho a la reparación han realizado una serie acciones con el objetivo de viabilizarlo.

Por ejemplo, la Fiscalía ha recolectado toda la información relativa a las denuncias presentadas por las víctimas en todas las fiscalías seccionales del país, también ha iniciado el recibo de versiones libres y han abierto un canal de reporte de los hechos por parte de las víctimas a través de un formato difundido en forma masiva. Por otra parte, la Procuraduría, viene adelantando proyectos para fortalecer su capacidad institucional de vigilancia efectiva y así cumplir el deber del Estado de garantizar y proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, a través de las recomendaciones de criterios de reparación; de igual modo, el Ministerio del Interior de Justicia ha llevado a cabo jornadas de formación de los magistrados de justicia y paz y ha prestado su apoyo y asesoría en técnicas del comportamiento humano para implementar durante las audiencias, en la adopción de decisiones y en el seguimiento de los compromisos adquiridos por los desmovilizados; por último la Defensoría del Pueblo en relación con esfuerzos tendientes al acompañamiento psicosocial y con el objetivo de cualificar la participación de las víctimas, promueve la asistencia a la representación judicial, la orientación para documentar casos y la recolección de requisitos para la demostración la conexidad entre daño y responsable.

Sin embargo también es relevante mencionar que desde la producción escrita las organizaciones femeninas, (Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, Organización Femenina Popular, IMP, entre otras), manifiestan una serie de cuestionamientos hacia las acciones realizadas por la Fiscalía, de ahí que, en el proceso de acopio de denuncias efectuadas por las víctimas no las ha divulgado de manera efectiva; no obstante, la CNRR manifiesta que se presenta intercambio de información, sobre los patrones de violencia, entre instituciones privadas y públicas y que actualmente se busca el proceso de sistematización de las mismas.

4.2.2 Consideraciones institucionales y académicas en torno al derecho a la reparación. Los principales hallazgos se relacionan con cuestionamientos y recomendaciones en torno a la formulación la Ley 975 de 2005, el deber ser del derecho a la reparación integral y de la responsabilidad del Estado y por último los obstáculos en la garantía de tal derecho.

¹⁴ Se ha incluido personal de sedes de la CNRR, profesionales de la Defensoría del Pueblo, Acción Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Pastoral Social y Universidades.

En lo referido a la formulación de la Ley 975 de 2005, los cuestionamientos registrados desde la producción escrita institucional y académica enfatizan en: la no vinculación participativa de las víctimas en el proceso de reparación, lo que les otorga un papel secundario en relación con los delitos declarados por el desmovilizado y asocia a la víctima con derrota y fracaso, culpa y persecución, y no como actores activos que contribuyen al alcance, eficiencia y eficacia de la políticas de reparación.

Del mismo modo dicho marco legal no garantiza la no repetición de los delitos cometidos por los actores armados, por cuanto no estipula de manera explícita estrategias para la reincorporación a la vida civil, así como tampoco el momento judicial en el que se aplica; también se critica que el diseño de las medidas de reparación a implementar no son proporcionales a las manifestaciones de violencias de género en contra de las mujeres, por este motivo las instituciones gubernamentales y no gubernamentales recomiendan al gobierno colombiano que en el marco jurídico de procesos de negociación tendientes a resolver el conflicto armado interno, se adopten medidas destinadas a garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación de las mujeres y las niñas víctimas.

Otro cuestionamiento a la formulación se refiere a que no debe aplicarse la prescripción para el ejercicio del derecho a la reparación, cuando por motivos legales la víctima no se hubiere hecho presente para reclamarlos durante el proceso, critica que tiene relevancia en las condiciones de las víctimas, que no poseen suficientes recursos para permanecer en el proceso. Tampoco debería existir responsabilidad por parte de las víctimas de identificarse como tales, esto le resta legitimidad y equidad al proceso de aplicación de la Ley y menos aún si no existen las garantías de seguridad que deben ser brindadas por parte del Estado.

No obstante al deber ser del Estado colombiano plasmado desde la perspectiva institucional, es evidente que las prioridades del mismo en cuanto a protección, ampliación y restitución de los derechos de las víctimas, pasan a un segundo plano, dado que las acciones estatales no garantizan para las mujeres víctimas de violencia sexual el acceso de justicia, reconocimiento de su sufrimiento o una reparación que les contribuya en reconstruir su vida, panorama que respalda directa o indirectamente la impunidad de los delitos cometidos.

Por otro lado existen cuestionamientos al proceso de reparación colombiana, uno de los más significativos en la producción escrita institucional se refiere a que la reparación no se esta desarrollando en un contexto de pleno postconflicto, sino en medio de la persistencia de la violencia.

En un segundo plano los hallazgos convergen en discusiones entorno a reparación simbólica, al esclarecimiento de los hechos, las condenas dirigidas a los desmovilizados y el proceso de restitución de bienes; desde la perspectiva académica se cuestiona los componentes del derecho a la reparación.

Respecto a la reparación simbólica que al igual que la económica es de gran importancia, desde la perspectiva institucional ésta no puede limitarse a la construcción de

monumentos, su comprensión debería abarcar fechas conmemorativas, reconstrucción de las instituciones sociales y del tejido social; se cuestiona la calidad de verdad presentada por los desmovilizados en las audiencias de declaración de delitos, dado que ésta puede ser expuesta de manera parcial y tergiversada; además los bienes destinados para la reparación integral a las víctimas muchas veces son inexistentes; no existe proporcionalidad de las condenas proferidas a los desmovilizados en concordancia con los delitos y daños causados.

Por último, académicamente se evidencian algunos cuestionamientos frente a la posibilidad de cumplimiento de los componentes de reparación integral, entre ellos la restitución, rehabilitación y satisfacción.

En cuanto al cumplimiento de la restitución se considera imposible, porque su logro depende de la negación de memoria de la víctima, ella tiene memoria de cada una de las manifestaciones de violencias de las cuales ha sido objeto. Para el caso particular de la población en situación de desplazamiento, es imposible volver a la situación anterior, debido a que lo que poseían está destruido, en cuanto a la restitución de bienes implica además la compensación en aspectos sociales, políticos y culturales, no se trata de recuperar lo que se tenía, sino de brindar las condiciones para construir una vida digna.

En lo referido al componente de indemnización se señala el rol principal que tienen los desmovilizados, dado que la ley les delega la responsabilidad de indemnizar a través de la entrega de bienes, sin embargo no existe un mecanismo que permita el registro y control del total de bienes poseídos por ellos, razón por la que la restitución de bienes a víctimas no será acorde a los bienes usurpados. En relación a la rehabilitación se comprende como atención brindada por el Estado, en este sentido los servicios sociales cuentan como una medida de reparación un derecho que ya está dado y que no amerita un esfuerzo particular para el Estado, así se convierte en un procedimiento vacío y no en uno de atención integral y de exclusividad para las víctimas del conflicto armado.

Por último se cuestiona la posibilidad de lograr una plena satisfacción, por cuanto en esta no existe credibilidad, confianza ni coherencia entre los procesos que pretenden garantizar el derecho.

A la par de las anteriores críticas, se recomienda hablar de un acompañamiento psicosocial, en lugar de atención psicológica, pues este tiene mayor impacto social, no es tan subjetivo e implica el restablecimiento del tejido social y la dignidad de las víctimas con ocasión a la violación de sus Derechos Humanos y que no han sido reparadas. Sin embargo, la CNRR señala que a pesar de las acciones emprendidas por la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, es evidente la indiferencia del Estado frente al acompañamiento psicosocial, pues la agenda estatal no lo contempla.

Ahora bien, los resultados focalizados en el derecho a la reparación integral, invitan a comprender que existe una relación entre los derechos a la verdad, justicia y reparación; sobre todo existe relevancia de la verdad como una dimensión inseparable de la justicia y es en sí misma un mecanismo directo de reparación, restitución y rehabilitación. Ésta, también facilita la construcción de la memoria histórica y el descubrimiento de un pasado,

lo que permite realizar una reclamación frente a un delito o para el caso de la presente investigación, una manifestación de violencias de género en contra de las mujeres.

De acuerdo a lo anterior con el fin de buscar una reparación integral y aunque la obligación de reparar compromete directamente a quienes cometieron las manifestaciones de violencias y violación a los Derechos Humanos, es responsabilidad del Estado, que fundamentado en estándares internacionales, garantice el derecho a la reparación, y así en coherencia con lo mencionado institucional y académicamente, se alivie el sufrimiento de las víctimas, se haga justicia restaurativa, a través de la eliminación o corrección, en lo posible, de las consecuencias de los actos ilícitos, y adopte medidas preventivas y convincentes, que busquen la superación de la impunidad, como único medio idóneo para la paz; Igualmente el Estado debe asumir seriamente las garantías de no repetición de las violaciones de Derechos Humanos y definir una política de reparación que no radique únicamente en la responsabilidad penal de los desmovilizados, ni al patrimonio de ellos.

De la misma forma desde las consideraciones académicas, la garantía del derecho a la reparación por parte del Estado debe cobijar todo tipo de casos que vulneren los Derechos Humanos, no sólo los cometidos por los grupos al margen de la ley sino también comprenda los delitos cometidos por integrantes la fuerza pública.

En este orden de ideas, los aportes institucionales y académicos indican que para lograr un verdadero programa de reparación se debe incluir: una conceptualización precisa de la víctima, de su universo, de sus anhelos y expectativas, que sólo se obtiene a través del ejercicio de recordar (memoria) y de la información que el mismo Estado construye a partir de esto (historia), de ahí la importancia que se le debe otorgar a las víctimas y sus familiares, la oportunidad de participar y ser escuchados, así el relato de la víctima permite conocer sus expectativas de reparación. También debe reconocer las necesidades específicas de las mujeres, en especial con prioridad a las mujeres cabeza de familia, indígenas o afrodescendientes, estableciendo parámetros diferenciados de reparación para las mujeres que sean víctimas directas o indirectas de manifestaciones de violencia sexual; los tratamientos que atiendan las manifestaciones de violencias de género, deben incluirse en el Sistema de Seguridad Social. Ante lo anterior, la CNRR plantea:

(...) Cuando se está ante una violación sexual por el impacto que esta tiene, suele recomendarse una atención psicológica y, también, brindar la atención gineco-obstetra, pues muchas mujeres sufren de secuelas físicas tan graves como las psicológicas. Así mismo, son necesarias medidas de reparación en los casos en los cuales, fruto de la violación sexual, se haya producido un embarazo y el nacimiento de un/a niño/a (...) Respecto al restablecimiento de la capacidad laboral de las mujeres víctimas, la Comisión recomienda considerar la capacitación como una medida de reparación fundamental e imprescindible para las mujeres cabezas de hogares (...) y así promover el derecho de la mujer víctima del conflicto armado a contar con las oportunidades que le permitan mantener dignamente a su familia (...) (CNRR, 2007:89-90)

De la misma manera se recomienda que las reparaciones además de ser de carácter individual, colectivo y material, contemplen reparaciones psicológicas, ambientales, de territorio, étnicas-culturales y desde una perspectiva de género; también se recomienda diseñar e implementar medidas de monitoreo, de supervisión del contexto social, de

control y capacitación dirigida a los funcionarios y operadores jurídicos no sólo en herramientas, instrumentos y parámetros del marco legal que garantiza la reparación, sino también en la atención que cada una de las víctimas debe recibir. Además de la necesidad de conformar equipos interdisciplinarios que promuevan el cumplimiento de los derechos de las víctimas; adicionalmente se plantea la necesidad de formular e implementar una política pública que garantice el derecho a la reparación de población en situación de desplazamiento, particularmente para las mujeres.

Del igual modo, la compensación económica según la CNRR puede definirse a través del establecimiento de pensiones a víctimas que con ocasión a los daños sufridos hayan sido víctima de homicidio, desaparición forzada o secuestro, también niños, niñas y adolescentes huérfanos e igualmente aquellas que sufran de discapacidades físicas y/o psicológicas.

Desde las apreciaciones académicas la búsqueda de la reparación, permitiría a las víctimas transformar sus sentimientos de pena a través de un proceso público en el que se reconoce que algo fue injusto y que los responsables serán castigados; en este sentido se posibilita la elaboración de duelo por parte de las víctimas, establecer nuevas relaciones y mantener un recuerdo de su ser querido fallecido o desaparecido, elementos que conjuntamente conllevan al rompimiento de patrones de venganza que alimentan y mantienen el conflicto armado. Igualmente, debe guardar proporcionalidad entre la gravedad de las violaciones y las medidas tendientes a reparar, en este sentido es importante analizar la proporcionalidad de la reparación en relación con las violencias de género que han sufrido las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano.

En otros términos, el ámbito académico sugiere un conjunto de actos para avanzar en la reparación integral, tales como la entrega de bienes por parte de los desmovilizados al Estado para la reparación de las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento por el daño causado, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas; también la colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas, cadáveres de las víctimas y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.

Por otra parte, se ubicaron desde la producción escrita una serie de obstáculos en la garantía del derecho a la reparación que se reflejan tanto interinstitucionalmente como en las propias condiciones de las víctimas.

En relación con los obstáculos institucionales se evidencia que a pesar de sus avances, la participación de las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial se dificulta en cierta medida, debido a la falta de garantías mínimas que aseguren su integridad, presentándose que en algunos casos las víctimas reciben amenazas por parte de los desmovilizados durante este proceso. Del mismo modo se carece de recursos necesarios, tanto humanos, materiales y científicos para la investigación de los hechos, lo cual afecta la capacidad demostrativa de las pruebas que permitan el cumplimiento de todas las etapas procesales, por ejemplo, en lugares aislados prevalece la inexistencia de oficinas jurídicas, donde a las víctimas de violaciones sexuales se les proporcione asesoría y

acompañamiento legal y psico-social. Tampoco las instituciones cuentan con criterios homogéneos en sus sistemas de información, que permitan construir cuadros históricos, analizar los factores socioculturales que se encuentran vinculados a las violencias contra las mujeres.

Al mismo tiempo, durante el proceso judicial las condiciones de desigualdad entre víctimas y desmovilizados son evidentes, ellas en ocasiones no cuentan con un representante judicial especializado (aunque el Estado le asigna un representante, puede que éste no tenga la formación requerida para defender la complejidad del caso), mientras que el victimario cuenta con los recursos suficientes, adquiridos ilegalmente, para contratar a un defensor. Desde la perspectiva de las víctimas, una de las mayores dificultades que presenta el proceso de restitución de bienes es la titulación precaria de los inmuebles, que afecta a quienes han perdido sus propiedades.

Otro de los obstáculos en la garantía del derecho a la reparación integral, lo constituye que las mujeres víctimas de manifestaciones sexuales de violencias de género, por temor a represalias, a ser estigmatizadas o por falta de confianza en los procedimientos, se abstienen de realizar las correspondientes denuncias.

Por otro lado, los rasgos socioculturales y socioeconómicos de las víctimas condicionan el acceso a dicho derecho, dado que la mayoría de sobrevivientes son mujeres cabeza de familia, de origen rural, con bajo nivel de ingresos, escasa escolaridad, poca experiencia de movilidad en lo público, desconocimiento de la lógica de funcionamiento tanto de las instituciones como del sistema de justicia, todas estas condiciones contribuyen a reducir la participación efectiva de dichos procesos. Por ejemplo, en algunos casos aunque las víctimas desean asistir a las versiones, sus condiciones económicas impiden el traslado desde su lugar de residencia, que generalmente es rural, hasta las ciudades donde se rinde la versión y menos aún para permanecer allí por el tiempo que dura la versión.

"Para una víctima, reclamar sus derechos en el marco de la ley de justicia y paz, le implica contar en promedio con \$900.000 mensuales entre costos de transporte, hospedaje, alimentación, fotocopias, costos notariales y pago de abogado, si no aceptan un defensor público". (Iniciativa de Mujeres por La Paz, 2007:61-62)

La garantía de restitución de tierras se ve imposibilitada dado que en muchos casos, las mujeres no poseen los documentos que comprueben la propiedad de tierras usurpadas y persiste el desconocimiento de límites rurales. Igualmente, las alternativas reales frente a la estabilización socioeconómica, fundamentalmente en materia de vivienda, tierras y generación de ingresos, siguen siendo insuficientes.

4.2.3 Significado de reparación integral. Desde la producción escrita es evidente el escaso registro de las expectativas que las mujeres tienen de una reparación integral; sin embargo se encontró desde la perspectiva de las víctimas que ésta significa algo más que una indemnización económica y que su alcance y restitución de tierras es imposible por cuanto su exigencia atribuye represalias en contra de las víctimas y de sus familias; de igual manera las mujeres comprenden este derecho como un conjunto entre la verdad y

justicia, así como la necesidad de que exista memoria de lo sucedido para que no se reproduzca la invisibilización de mujeres.

Así mismo para ellas, un paso para la garantía del derecho a la reparación integral parte de la importancia de organizarse, pues se contempla como una de las formas más valiosas de resistencia porque sirve para el ejercicio pleno de sus derechos como víctimas y no permite que la impunidad continúe, así mismo pretende romper con el silencio y visibilizarse ante la sociedad.

(...) Víctimas, organizaciones sociales y comunidades entienden la reparación en estrecha relación con el esclarecimiento de la verdad, la atribución de responsabilidades, la imposición de sanciones y las reformas institucionales. La reparación no se entiende como una política aislada que se limite a distribuir ciertos beneficios económicos (...) (CNRR, 2007: 112-113)

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis del ejercicio de prácticas que corresponden a manifestaciones físicas, sexuales y psicológicas de violencias de género y su influencia en las dimensiones individual, familiar y comunitaria, conlleva a evidenciar que en el marco del conflicto armado existe grave vulneración a la integralidad de las mujeres.

Hay casos en los que coexisten los tres tipos de manifestaciones de violencias de género, con una clara intencionalidad por parte de los actores armados, quienes por disputa de poder y control territorial involucran directa e indirectamente a las mujeres en acciones que vulneran Derechos Humanos, y que a su vez repercuten en las dimensiones individual, familiar y comunitaria, situación que en algunos casos conduce y se agudiza durante el desplazamiento.

De este modo la influencia de acciones violentas en la dimensión individual de las mujeres, incluidas aquellas que son desplazadas o que se resisten a abandonar su lugar de origen o residencia, converge tanto en su parte física o corporal como en su subjetividad. En relación con lo físico las mujeres deben asumir, entre otros, cambios corporales a raíz de la pérdida o lesión de alguna parte de su cuerpo, la adquisición de enfermedades sexuales, embarazos no planeados ni deseados, así como la inestabilidad en la seguridad alimentaria y de vivienda; al mismo tiempo la subjetividad de las mujeres experimenta y asume cambios o transformaciones emocionales que alteran y fragmentan la estabilidad relacional y de vínculo consigo misma y su red social, además dado el contexto existen condiciones particulares que dificultan o prolongan la elaboración del duelo.

Así, la influencia en la dimensión individual de las mujeres encuentra interrelación entre lo físico y subjetivo, por lo cual se comprende ésta desde un conjunto recíproco, que en el contexto del conflicto armado, agudiza los patrones de discriminación y de explotación, dificulta el acceso a ámbitos laborales, educativos y de salud, trunca el proyecto de vida de las mujeres y altera el bienestar emocional, elementos que tienen un valor importante

en la construcción de identidad, de auto concepto así como el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos.

En la influencia de las manifestaciones de violencias de género en la dimensión familiar, tanto de las mujeres que han sido desplazadas como las que no, existe un desequilibrio en la estructura familiar de acuerdo a su composición, funcionalidad y dinámica.

La composición familiar como elemento importante de dicha estructura, comprende cambios en los subsistemas conyugal, filial, parental y fraternal, conllevando en ocasiones a la desintegración familiar, dado que la mayoría de las manifestaciones de violencias, contribuyen al incremento de separaciones, viudez o abandono familiar de su cónyuge o compañero y huerfanidad. Así la estructura familiar se recompone, dado que en ocasiones se incluye a nuevos integrantes al núcleo familiar, ya sea que con ellos se posea algún vínculo afectivo o no. Igualmente y dadas las condiciones económicas, los hijos jóvenes se alejan de la familia ya sea por reclutamiento o vinculación a grupos al margen de la ley o bandas delincuenciales.

Del mismo modo, la funcionalidad de la familia de acuerdo a las circunstancias mencionadas anteriormente, se ve expuesta a transformaciones de roles femeninos, pues las mujeres deben asumir jefatura femenina, lo que trae consigo oportunidades laborales en algunos casos con condiciones indignas, denigrantes, con largas jornadas de trabajo, baja remuneración salarial, relacionada en ocasiones con la escasa capacitación y nivel de escolaridad; igualmente, cuando los integrantes de la familia, entre ellos sus hijas e hijos están expuestos a contextos de inseguridad, se refuerzan los patrones de protección por parte de las progenitoras; los roles desempeñados antes de la situación de desplazamiento cambian, la función doméstica y de cuidadora, heredada de la cultura patriarcal, es reemplazada por la de proveedora e incide en las pautas de crianza y procesos de socialización.

La integración familiar y transformación de roles femeninos renuevan la dinámica de la familia en situación de desplazamiento y cuando se resiste a él. Generalmente la familia proveniente de áreas rurales debe enfrentarse a contextos urbanos, que traen consigo nuevas pautas de interacción con el entorno e influye en las establecidas al interior, por ejemplo las madres con el riesgo de que sus hijos sean reclutados voluntaria o involuntariamente, controlan los horarios de salida y llegada de éstos, lo que genera nuevos conflictos. En la relación conyugal también se originan o agudizan los conflictos que en ocasiones conlleva a violencia intrafamiliar; por otro lado, durante la adaptación a un nuevo contexto que ofrece particulares condiciones habitacionales, de seguridad social y de convivencia, las costumbres tradicionales tienden a desaparecer o modificarse sustancialmente.

En el ámbito económico, la búsqueda de fuentes de ingresos tiene relación con dos aspectos: el primero, exige una mayor dedicación de tiempo por parte de las madres a obligaciones laborales, así se relega a terceras personas el cuidado de las hijas e hijos, en algunos casos ellos deben permanecer por largo tiempo solos, situaciones que influyen en los procesos de comunicación, unidad y fortalecimiento familiar; en un segundo lugar

como fuente de financiación para superar difíciles condiciones económicas, las mujeres deben recurrir a la venta de sus bienes materiales mientras que cuando los pierden tienen difícil acceso a los derechos propiedad.

El análisis referido a la influencia de las manifestaciones de violencias en la dimensión comunitaria de las mujeres que han trabajado en el ejercicio de un liderazgo comunitario o sindical, se evidencia que éstas, con el fin de salvaguardar sus vidas y la de sus familias, se ven obligadas a abandonar en gran medida su compromiso social.

Por consiguiente se presenta un agravante en el marco del conflicto armado, que desestructura las relaciones y procesos comunitarios previamente establecidos a las manifestaciones de violencias de género. En este sentido la participación comunitaria y resistencia civil se desdibuja a partir de la desintegración de procesos participativos de las organizaciones femeninas, comunitarias y de Derechos Humanos, que en este contexto intentan proteger y reivindicar la violación de derechos de la población civil, particularmente hacia las mujeres; la conservación de las organizaciones, su sostenibilidad y garantía de su ejercicio por parte del Estado facilita el cumplimiento de derechos y deberes en el fortalecimiento de la democracia del país.

El análisis del equipo investigador referido con el desarrollo del derecho a la reparación a partir de la expedición de la Ley 975 de 2005, particularmente en relación con las acciones emprendidas por parte del Estado, es relevante el hecho de que dichas acciones han sido principalmente materializadas por instituciones cuya misión converge con las necesidades planteadas desde la formulación de la ley, entre ellas la CNRR, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

Aunque las acciones realizadas han enfatizado en la divulgación de derechos de las víctimas, elemento importante para tener acceso al derecho a la reparación, pues supone que ellas conozcan que su vulneración de derechos puede ser reivindicada, se considera relevante que los esfuerzos institucionales no sólo se restringan a este tipo de estrategias, por cuanto desde la complejidad de las manifestaciones de violencias de género dirigidas hacia las mujeres, muestra la necesidad de brindar integralmente seguimiento y acompañamiento psicosocial, esto con el fin de trascender en los mecanismos de atención para las víctimas y dar continuidad a procesos planteados.

Pareciera ser que las acciones institucionales encuentran fundamento en el incipientemente reconocimiento de una atención especial a grupos poblacionales, entre ellos mujeres, niñas y niños, personas mayores de edad o con discapacidad, (Art. 41), sin embargo la formulación de Ley 975, tal y como esta planteada no responde a las verdaderas necesidades de las mujeres en el marco del conflicto armado, por cuanto su eje central se fundamenta en la desmovilización de los grupos al margen de la ley y desde luego se traslada a un segundo plano la realidad de las mujeres, que muestra unas condiciones complejas que vulneran sus Derechos Humanos.

En este sentido la CNRR ha logrado un avance conceptual, al mostrarse de acuerdo con desarrollar su plan de trabajo desde una perspectiva de género y en correspondencia con

el trabajo de campo realizado por esta institución, es relevante dado que promueve la participación activa de las mujeres, es ahí donde se puede escuchar sus voces, expectativas, necesidades y en términos generales su significado de reparación integral. Empezar este tipo de trabajo es reconocer a las mujeres víctimas del conflicto armado como actores políticos y su rol incidente en la formulación de políticas públicas que propendan a dar respuesta integral a su situación, en este sentido sólo si se garantiza un trabajo participativo, que vincule a quienes inspiran un marco normativo se logrará un impacto del mismo.

Sin embargo es evidente que lejos de la intención de un marco normativo esta su implementación, que para el caso concreto, se dificulta por las ambigüedades en su formulación dado que no es explícito y no determina o asigna responsabilidades a los involucrados, entre ellos los grupos al margen de la ley, la fuerza pública y el Estado.

Así, por ejemplo el proceso que garantiza el derecho a la reparación está condicionado, por el hecho mismo, de que en la actualidad persiste el conflicto armado generalizado en diversas zonas del país; de otra parte, está restringido al eficaz funcionamiento del Fondo de Reparación a Víctimas, que abarca el control de recursos y bienes que lo componen. También a la completa y verídica declaración, de delitos cometidos y entrega de bienes por parte de los desmovilizados; al acorde manejo, mantenimiento, ordenamiento y coordinación de los sistemas informativos de las instituciones, así como a la limitación de recursos logísticos, humanos y materiales; todo ello elementos que requieren un largo plazo para una consolidación eficiente.

Teniendo en cuenta que el deber de reparar radica en quienes directamente cometieron las prácticas violentas objeto de reparación y que el Estado en función de velar por el cumplimiento de Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de diseñar mecanismos que garanticen la reparación, además en el caso que los recursos de los directos responsables no sean suficientes, el Estado debe resarcir los daños, y que también la participación directa de las víctimas es indispensable para garantizar la transparencia del proceso reparador, en la actualidad la extradición a Estados Unidos de 14 paramilitares que se habían acogido a la Ley 975 de 2005, evidencia un retroceso judicial y prolonga, aún más, la garantía al derecho a la reparación integral, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (2008) señala además que: *(...) con la presencia de estos jefes paramilitares en Colombia las víctimas de delitos graves tenían la oportunidad de enfrentar al acusado en los tribunales y también de ayudar a determinar las indemnizaciones con ganancias lícitas e ilícitas de quienes fueron condenados. Así mismo, representa desconcierto y pérdida de confianza por parte de las víctimas, quienes con anhelo de reivindicar su dignidad y buen nombre, esclarecer los hechos por los cuales se convirtieron en víctimas, tomaron la decisión de denunciar, de vincularse al proceso judicial y siendo conscientes de que con ello existen posibles represalias no sólo hacia ellas sino también sus familiares.*

De otra parte, según la reparación administrativa planteada por el Plan Nacional de Reparaciones, tiene un carácter individual y limitado dado que privilegia la indemnización económica frente al acompañamiento psicosocial, que pretende el fortalecimiento del tejido social, así como de los vínculos y estructura familiar y comunitaria. Este énfasis a la indemnización económica reagrupa nuevos intereses que no para todas las víctimas son

determinantes; la reparación administrativa no contempla los beneficios que ofrece la reparación judicial, dado que en ésta aunque de manera parcial, existe la oportunidad de esclarecer los hechos violentos y supone hacer justicia con penas irrisorias, componentes de verdad y justicia, que reivindica el buen nombre de las víctimas, ya que muchas veces fueron acusadas como colaboradoras de grupos armados; si bien incluye como beneficiarias a todas las víctimas, independientemente de quien haya sido el actor responsable de las violaciones, en el Decreto 1290 aprobado el 22 de abril de 2008, tampoco contempla las violaciones ejercidas por la fuerza pública y no incluye las violaciones contra la propiedad, el patrimonio y violaciones colectivas. (Art.2)

El decreto no vincula mecanismos para conocer la verdad que tanto reclaman las víctimas, tampoco incluye garantías para que puedan acceder a mejores oportunidades en materia de educación, trabajo y vivienda y no reconoce la corresponsabilidad del Estado. (Revista Semana, 2008)

Así la reparación administrativa, centrada en la indemnización pretende ser una respuesta eficiente frente a la reparación judicial, sin embargo suponer que existirá una reparación administrativa, implica contar con recursos económicos suficientes que en relación con la magnitud de víctimas es desproporcionada e insuficiente.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados y análisis de la presente investigación se concluye que las manifestaciones de violencias de género en el marco del conflicto armado, entre ellas las físicas, sexuales y psicológicas, son ejercidas por todos los actores armados, sin distinción alguna de la condición política, económica, cultural, étnica y de ciclo vital de las mujeres colombianas, contexto que ejemplifica claramente la cultura patriarcal en la que se agudiza la desigualdad y discriminación hacia las mujeres.

De igual modo dado que las prácticas basadas en la violencias de género inciden directamente en la subjetividad femenina, desarticulan los vínculos comunitarios, transforman la dinámica y estructura familiar, coartan la participación política de las mujeres, es preciso resaltar la articulación de las influencias individuales, familiares y comunitarias, para el caso Colombiano, además el requerimiento de una respuesta integral y no parcializada o limitada, la necesidad de una reparación integral que contemple las dimensiones subjetivas y materiales de las víctimas, que sea proporcional al daño cometido y que no sólo se restrinja a una indemnización económica e individual, planteada actualmente por el Plan Nacional de Reparación .

Aunque es evidente el avance conceptual en relación al derecho a la reparación integral, también es cierto la desarticulación entre la formulación e implementación de la ley y el panorama de las mujeres víctimas de la violencias de género, por cuanto su fundamentación intenta dar respuesta a un proceso de desmovilización y no a reparar las influencias ocasionadas a las mujeres en el marco del conflicto armado.

Si bien la obligación de reparar recae en quienes cometieron daños a la población civil, y de acuerdo a los estándares internacionales, el Estado como institución que vela por la protección y garantía de los Derechos Humanos está en la responsabilidad de garantizar el acceso a una reparación integral.

Las consideraciones de las instituciones no gubernamentales y de la academia entorno al derecho a la reparación, desde la producción escrita cuestionan la implementación del proceso mismo, por cuanto no ha incluido activamente las expectativas ni participación de las víctimas, un claro ejemplo de ello es la escasa publicación de las expectativas y significados de reparación integral que de ella tengan las víctimas.

El acompañamiento psicosocial cobra un papel importante puesto que contribuye al fortalecimiento del tejido social no sólo de manera individual sino también colectiva que promueva el trabajo en red, la cohesión social, la participación política, el restablecimiento de la estructura y dinámica familiar, el empoderamiento político, el fortalecimiento de competencias, entre otros; Escenario idóneo para la intervención de Trabajo Social que con sus aportes teóricos - conceptuales proporcionan elementos de análisis integrales que, brindan la oportunidad de incluir a las víctimas directas e indirectas de las manifestaciones de violencia de género, en dichos procesos desde un trabajo interdisciplinario.

La reparación integral no se garantiza en medio del conflicto armado, por cuanto este contexto no provee de seguridad a las víctimas que decidieron participar en el proceso judicial y prevalece la repetición o continuidad de hechos violentos, lo que conduce a que la dinámica del proceso de reparación revictimice a las mujeres.

La reparación integral resulta más compleja por la innumerable cantidad de víctimas y sus características sociales, entre las que están las condiciones de vida (educación, recursos económicos) y subjetivas, que restringen el acceso a la información y por ende la exigencia del cumplimiento de sus derechos, el desenvolvimiento dentro de un proceso judicial, condiciones que le otorgan un rol secundario en el proceso; de igual modo prolonga la restitución de bienes muebles e inmuebles para la reparación a las víctimas del conflicto armado, así como la reestructuración de vínculos culturales, sociales y ambientales, la sostenibilidad económica y productividad agrícola.

La garantía al derecho a la reparación para las víctimas, está condicionado por la situación de vulneración de las mujeres, en coherencia con las influencias de las manifestaciones de violencias de género en el marco del conflicto armado, así circunstancias de pobreza, escasa garantía en su seguridad, bajos niveles de educación, entre otras, desestabiliza la participación de las mismas en este proceso.

La insuficiencia de recursos económicos por parte del Estado y de los desmovilizados para efectuar una plena reparación no puede constituirse en una excusa para no garantizarla, el derecho a la reparación integral abarca también diversas dimensiones que adquieren gran importancia para las víctimas, así una declaración pública que reivindique el buen nombre u honra de sus parientes, el establecimiento de una fecha conmemorativa, la plena satisfacción de la verdad de los hechos, la seguridad de que se va a hacer justicia y que los mecanismos jurisprudenciales diseñados no reproduzcan la impunidad, que aunque no las conduzca a su situación anterior al daño cometido, contribuye a dignificarlas y cerrar su ciclo de duelo.

La dinámica del conflicto armado obstaculiza la creación y sostenibilidad de las organizaciones de víctimas, que refuerzan los mecanismos de participación femenina, faciliten los procesos de comunicación entre víctimas que se encuentran en lugares aislados y carecen de acceso a la información.

La responsabilidad estatal en el aseguramiento de condiciones que garanticen el libre ejercicio de participación política, la no repetición de conductas violentas hacia la población civil, en especial a las mujeres, es indispensable para que el proceso establecido por la legislación propuesta tenga sostenibilidad e impacto a corto y largo plazo de acuerdo a la dinámica misma del país.

RECOMENDACIONES

Para la Facultad de Trabajo Social Universidad de La Salle

Incluir en el contenido curricular no sólo la jurisprudencia relacionada con el derecho a la reparación sino también la normatividad nacional e internacional que permita al profesional de Trabajo Social adquirir las competencias mínimas de conocimiento legal respecto al tema.

Adelantar investigaciones con temáticas relacionadas al contexto del conflicto armado, particularmente aquellas referidas a las principales estrategias e impactos del confinamiento.

Investigar frente al plan nacional de reparaciones liderado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; y la importancia de la reconciliación en los procesos de paz.

Para las y los Trabajadores (as) Sociales

Con el fin de prevenir la vulneración y promover el ejercicio de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, las y los profesionales deben emprender diagnósticos e investigaciones que contribuyan a la consecución de componentes estratégicos para el acompañamiento psicosocial a víctimas y el establecimiento de estrategias que orienten la formulación de planes, políticas, programas y proyectos de reparación integral coherentes a la realidad de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano.

Para la Universidad de La Salle

Fortalecer el compromiso social frente a la situación real que vivencian las mujeres víctimas del conflicto armado y el derecho a la reparación integral según Ley 975 de 2005.

APRENDIZAJES

A nivel investigativo

La reparación integral a mujeres víctimas del conflicto armado es un derecho que debe ser garantizado, en proporción a la vulneración de Derechos Humanos, expresada en las manifestaciones de violencia de género física, sexual y psicológica y en influencias individuales, familiares y comunitarias; de igual modo debe partir del reconocimiento de las condiciones socioculturales particulares de la población femenina, de la capacidad de empoderamiento que ella posee y su rol como actor político dentro de la sociedad.

De acuerdo a la dinámica colombiana, la implementación institucional que busca adoptar la perspectiva de género en el marco del conflicto armado es un proceso que ha avanzado paulatinamente por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo tanto los procesos de inclusión social y perspectiva de derechos se convierten en escenarios de intervención interdisciplinar.

A nivel formativo

El acercamiento al contenido normativo propiciado por la investigación fortalece elementos de aprendizaje teóricos de la profesión, en la medida que permite articular, conocer y analizar de manera rigurosa e integral una realidad o problemática social a la luz de la legislación particular.

En relación con la formación de profesionales con fundamentos investigativos, prevalece la importancia de mantener la coherencia en los componentes y fases de la investigación.

A nivel personal

El fortalecimiento de competencias individuales de cada integrante, contribuye al alcance de metas establecidas grupalmente, para ello la identificación de intereses, el establecimiento de procesos de comunicación y el cumplimiento de responsabilidades individuales configuran un conjunto de elementos relevantes no solo para un objetivo investigativo sino para un actuar profesional.

La reformulación constante es un proceso que permite una construcción rigurosa, crítica y solida del proyecto de vida personal y profesional

BIBLIOGRAFÍA

AMANI, El Jack (2003). Género y Conflictos armados. Institute of Development Studies, 57 p.

AROCHA, Jaime et. al (1998). Las violencias: inclusión creciente. Centro de estudios sociales, Facultad de ciencias humanas, Universidad Nacional, Utópica ediciones: Bogotá, 331p

BASSIOUNI, Cherif. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 56ª sesión, 19 de abril de 2005.E/CN.4/2005/L.10/Add.11.

BONILLA, Elsy y RODRÍGUEZ Penélope (2005). Más allá del dilema de los métodos. Investigación en Ciencias Sociales 3a ed., Norma: Bogotá.

BOTERO, Marino Catalina y Restrepo Saldarriaga Esteban (2005). Entre el perdón y el paredón. Preguntas y dilemas de la justicia transicional. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes. Primera edición: Colombia, 280 p.

CAMACHO, Guizado Álvaro et al (2003). El conflicto colombiano y su impacto en los países andinos. Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Estudios Socioculturales CESO, Universidad de los Andes. Panamericana Forma e Impresos S.A.: Bogotá, 313 p.

CÁZAREZ, Hernández Laura et al (2003). Técnicas actuales de investigación documental. 3a ed. Trillas: México, 194 p.

COMISIONADO PARA LA PAZ (1999). Observatorio de Violencia. Imprenta nacional, 263 p.

CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL. (1995). Las mujeres en la Historia de Colombia. Tomo I Mujeres, historia y política. Editorial Norma: Bogotá, 455 p.

CORSI, Jorge (2003). Violencias sociales. Ariel S.A.: Barcelona, 255 p.

DEFENSORIA DEL PUEBLO (1998). Derechos para vivir en paz. Informe anual del ciudadano defensor del pueblo congreso de Colombia. Imprenta nacional: Bogotá. 208 p.

FUNDACIÓN SOCIAL (2005). Compilación de instrumentos internacionales, doctrinas y jurisprudencia sobre justicia, verdad y reparación. Géminis: Bogotá 382 p.

HERRERA, Echeverri Natalia (2007). Las mujeres como sujetos activos: una aproximación desde el conflicto armado colombiano. Universidad de Los Andes: Bogotá 95 p.

JOINET, Louis (1997). Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Comisión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas Doc.E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, anexo II.

MEERTENS, Donny (2000). Género y violencia. Representaciones y prácticas de investigación. En: Robledo Ángela Inés et al. Ética, masculinidades y feminidades. Universidad Nacional de Colombia. Lito Camargo Ltda: Bogotá, 361 p.

MEERTENS, Donny et al (1997). Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia. En: Nueva Sociedad volumen 148, 31-43 p.

MEERTENS, Donny (1995). Mujer y violencia en los conflictos rurales. En: Análisis político N° 24. Instituto de Estudios Sociopolíticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia, 36-49 p.

NACIONES UNIDAS (1995). Derechos Humanos y Trabajo Social. Centro de Derechos Humanos Naciones Unidas: Nueva York – Ginebra, 5-17-20 p.

PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2003). El conflicto callejón con salida. Informe nacional de desarrollo humano Colombia 2003. Panamericana formas e impresos: Bogotá, 514 p.

RODRÍGUEZ, Campos Ismael (2005). Técnicas de investigación documental. Trillas: México 131 p.

TORRES, Alfonso (1995). Aprender a investigar en comunidad. UNISUR: Bogotá.

VARGAS, Guillén Germán (1986). De la enseñanza a la pedagogía. Una hipótesis de trabajo y una alternativa metódica para la investigación documental. En: Revista Colombiana de Educación: Bogotá

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA COLOMBIA (2002). Conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 1998 – 2002. Programa Presidencial de Derechos Humanos y derecho internacional. Fondo de pensión para la paz – FIP Plan Colombia. Imprenta Ltda: Bogotá 363 p.

VIVEROS, Vigoya Mara (2000). Notas entorno a la categoría analítica de género. En: Robledo Ángela Inés et al. Ética, masculinidades y Feminidades. Universidad Nacional de Colombia. Lito Camargo Ltda: Bogotá, 361 p.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

CAMACHO, Guizado Álvaro et al (2003). El conflicto colombiano y su impacto en los países andinos. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales Centro de Estudios Socioculturales CESO. Panamericana Forma e Impresos S.A.: Bogotá

CARRIZO, Gloria et al (2000). Manual de fuentes de información. Confederación Española de Gremios y Asociaciones de librerías CEGAL: Zaragoza

CERDA, Hugo (1995). Los elementos de la investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos 2a ed. Búho: Bogotá

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA et al (1998). Derecho Internacional Humanitario Aplicado casos de Colombia, el salvador, Guatemala, Yugoslavia y Ruanda. Tercer mundo editores: Colombia, 465 p.

ECHANDÍA, Castilla Camilo (1999). El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia. Presidencia de la república del Alto Comisionado para la Paz- Observatorio de Violencia. Imprenta nacional: Colombia, 263 p.

FUNDACIÓN SÍ MUJER (2004). Embarazo por violación múltiple. Cali Colombia. Tercera edición, 186. p.

FUNDACIÓN SOCIAL (2005). Compilación de instrumentos internacionales y jurisprudencia sobre la verdad, justicia y reparación. Géminis, 299p.

GALVIS, Ortiz Ligia (2005). Comprensión de los Derechos Humanos una visión para el siglo XXI. Ediciones aurora: Bogotá, 396 p.

GARNER, Lorena (2001). Guía para la elaboración de proyectos e informes finales de investigación: Manizales, 53 p.

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (2004). Compendio de Normas Técnicas Colombianas sobre Documentación, Tesis y otros trabajos, actualización. ICONTEC: Bogotá.

HENAO, Diego Fernando et. al (2004). Las mujeres en la guerra de la desigualdad, a la autonomía a la política. Documento No. 2. CODHES: Colombia, 121 p.

MEERTENS, Donny (2000). El futuro nostálgico: desplazamiento, terror y género. En: Revista Colombiana de antropología volumen 36. Colombia, 112-135 p.

MEERTENS, Donny et al (1997). Las rutas del género en el desplazamiento forzado. En: Revista Javeriana número 635, tomo 128: Colombia, 361-367 p.

RED NACIONAL DE MUJERES (2003). Informe Derechos de las Mujeres en Colombia 2003. Corporación Humanizar, 167p.

VASCO, Carlos Eduardo (1994). Tres estilos de trabajo en las Ciencias Sociales. Tercera edición: Bogotá.

VÁSQUEZ, Rodríguez Fernando (2004). Pregúntele al ensayista. Primera edición Kimpres Ltda: Bogotá, 265. p.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA COLOMBIA (2002). Conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 1998 – 2002. Fondo de pensión para la paz – FIP Plan Colombia. Imprenta Ltda: Bogotá, 363 p.

PORTALES WEB CONSULTADOS

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. [En línea] <http://www.mujeresporlapaz.org/> (consulta 23 octubre del, 2007)

BRIDGE, Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en el Reino Unido (en castellano, ingles y francés): Informe General sobre Género y Conflictos Armados (Amani El Jack, 2003). [En línea] www.bridge.ids.ac.uk (consulta 14 febrero, 2008)

Colombiana de Juristas. [En línea] www.coljuristas.org (consulta 4 marzo, 2008)

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. [En línea] www.cnrr.org.co (consulta 10 mayo, 2008)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. [En línea] <http://www.codhes.org> (consulta 17 noviembre, 2007)

Defensoría del Pueblo. [En línea] www.defensoria.org.co (consulta 17 noviembre, 2007, 8 mayo 2008)

Haz lo justo. [En línea] www.hazlojusto.org (consulta 03 junio 2008)

Hechos del Callejón. [En línea] http://indh.pnud.org.co/boletin_hechos/index.plx (consulta 23 mayo 2008)

Human Rights Watch. [En línea] www.hrw.org/spanish/ (consulta 6 marzo 2008)

Sección 1.01 Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. [En línea] www.ilsa.org.co (consulta 2 abril, 2007)

La Agencia de la ONU para los refugiados. [En línea] <http://www.acnur.org/> (consulta 16 mayo, 2007)

Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”. [En línea] www.mujeryconflictoarmado.org (consulta 10 noviembre, 2007).

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. [En línea] www.hchr.org.co (consulta 19 octubre, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. [En línea] www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conv_americana_derechos_humanos.html - 77k (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. [En línea] [www.unhchr.ch/..../898586b1dc7b4043c1256a450044f331/74f610a152106994c1256af0003423ae/\\$FILE/G0141156.pdf](http://www.unhchr.ch/..../898586b1dc7b4043c1256a450044f331/74f610a152106994c1256af0003423ae/$FILE/G0141156.pdf) (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura. [En línea] www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-51.html - 27k - (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. [En línea] www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-60.html - 31k - (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convenio de ginebra. [En línea] www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/93_sp.htm - 235k - (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Protocolo I Convenio de ginebra. [En línea] www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=189286 - 41k - (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Protocolo II Convenio de ginebra. [En línea] www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/p_genoci_sp.htm - 18k - (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención para la prevención y la sanción del delito de Genocidio. [En línea] www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/p_limit_sp.htm - 16k (consulta 22 junio, 2008)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estatuto de la Corte Penal Internacional. [En línea] www.derechos.net/doc/tpi.html - 224k - (consulta 22 junio, 2008)

Sección 1.02 Procuraduría General de la Nación. [En línea] www.procuraduria.gov.co (consulta 19 octubre 2007, 4 abril 2008)

Red Nacional de Mujeres por la Paz. [En línea] www.rednacionaldemujeres.org - (consulta 3 marzo y 20 abril, 2008)

Ruta Pacifica de las mujeres. [En línea] www.rutapacifica.org.co (consulta 18 enero, 2008)

Sisma Mujer. [En línea] <http://guiagenero.mzc.org.es> (consulta 23 noviembre, 2008)

ANEXOS

ANEXO A

CONSULTA INVESTIGATIVA
2005 – 2007

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PERFIL DEL TEXTO	APORTE A LA INVESTIGACIÓN
<p>Título: condicionamientos internos y externos en la formulación de la política de Justicia y paz. Análisis 975 de 2005.</p> <p>Autor: ROJAS Jiménez Héctor Eli.</p> <p>Documento: Tesis Magíster en análisis de problemas políticos económicos e internacionales contemporáneos.</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad Externado. Facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales.</p> <p>Clasificación: TM320.011R268c Año: 2006.</p>	<p>Tiene en cuenta las modificaciones introducidas a la ley 975 de 2005, en virtud de la sentencia C370-06 de la corte constitucional, proferida el 18 de mayo de 2006. Así como el proceso de universalización de los Derechos Humanos.</p>

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERFIL DEL TEXTO	APORTE A LA INVESTIGACIÓN
<p>Título: La memoria, el perdón y la reparación en los acuerdos de paz y en la prolongación del conflicto armado en Colombia.</p> <p>Autor: Liliana Bastidas Martínez María Alejandra Gómez Parra</p> <p>Documento: Trabajo de grado para optar el Título de Psicóloga</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad Javeriana. Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana. Año: 2005</p>	<p>Proporciona un marco diferente al jurídico y político con el objeto de ampliar la perspectiva de comprensión de los procesos de reparación a las víctimas, de perdón a los agentes armados y violentos que atacan o agreden su integridad.</p>
<p>Título: Los desatinos de la negociación con los Paramilitares. Reflexiones sobre la ley de justicia y paz.</p> <p>Autor: Palacio Jaramillo Margarita María</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Política</p> <p>Documento: para optar al título en Magíster en Estudios Políticos. Año: 2005</p>	<p>Pretende dar una mirada, del proceso de negociación con los paramilitares a partir de una reflexión de la importancia, las motivaciones y los usos de la memoria; y los elementos para la reparación.</p>
<p>Título: Obstáculos a la reparación integral de las víctimas de los conflictos armados internos</p> <p>Autor: Caicedo Apraez Claudia Caicedo</p>	<p>Analiza las características de las guerras civiles y sus consecuencias para los procesos de reparación de las víctimas, en un contexto de</p>

Ubicación: Biblioteca Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Documento: Tesis para obtener el título de politóloga. Año: 2007	<p>conflicto armado no internacional, realizando un análisis comparativo entre países que han implementado medidas de reparación para resarcir el daño causado a la población civil.</p>
Título: Análisis comparativo de diversas experiencias internacionales en reparación a víctimas. Autor: Rivera Lina Ubicación: Biblioteca Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Documento: Tesis para obtener el título de Politóloga. Año: 2007	<p>Realiza un análisis comparativo sobre las condiciones contextuales que afectan los esquemas de reparación en situaciones de transición de guerra a paz y de sistemas autoritarios a regímenes civiles; además extrae lecciones que limitan los procesos de reparación a las víctimas de violaciones masivas de Derechos Humanos.</p>
Título: Estudio de las representaciones sociales que tienen las AUC y el Gobierno Nacional, sobre los principios de Justicia, Paz, Verdad, Perdón y Reparación en el marco del proceso de paz colombiano. Autor: Maria Teresa Alcocer G., Sylvia Reyes R., Leonardo Rodríguez Cely Ubicación: Biblioteca Universidad Javeriana. Facultad de Psicología. Documento: Tesis para obtener el título de psicóloga. Año: 2007	<p>Realiza una revisión teórica sobre los conceptos de Justicia, Paz, Verdad y Reparación tomando como referente el marco legal en que dichos términos están inscritos en Colombia, además Indaga acerca de las representaciones sociales que tienen las AUC y el Gobierno Nacional, sobre dichos conceptos en anuncios de prensa publicados desde los años 2005 y 2006 en diarios y revistas del país.</p>
Título: Significados de reparación psicosocial contruidos por víctimas de violencia política en Colombia, pertenecientes al movimiento "Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad" Autor: Adriana Mendoza Abello, Diana Marcela Espinel Bernal y Liliana Patricia Escobar Mahecha Raúl Vidales Bohórquez Ubicación: Biblioteca Universidad Javeriana. Facultad de Psicología Documento: Tesis para obtener el título de Psicóloga. Año: 2007	<p>Conoce, a través de las narraciones, los significados de reparación psicosocial contruidos por víctimas de violencia política en Colombia pertenecientes al movimiento "Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad". bajo la lógica de entender las voces de las víctimas como el principio orientador en la consolidación de procesos de reparación psicosocial, incluyendo tanto los recursos con los que cuentan las víctimas, como las afectaciones</p>

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PERFIL DEL TEXTO	APORTE A LA INVESTIGACIÓN
Título: Expiación infinita perdón y justicia. Análisis discurso de la Ley 975 de 2005, ley de justicia y paz, confrontado con la noción de perdón de Jacques Derriba. Autor: Morales Fontilla, Julia Alejandra	<p>Realiza una lectura de la propuesta de Jacques Derriba y un análisis crítico a la ley 975 de 2005,</p>

<p>Ubicación: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de lenguajes y estudios socioculturales. Biblioteca Universidad de los Andes.</p> <p>Documento: Tesis profesional en lenguajes y estudios socioculturales.</p> <p>Clasificación: 306.2 M561 Año: 2006</p>	<p>respecto a los temas que se relacionan con el perdón, para evidenciar los retos que una aplicación de ésta conllevaría y así lograr el ejercicio práctico de una propuesta teórica.</p>
<p>Título: Discusiones en torno a la ley de Justicia y Paz: ¿Dignifica o Desfavorece a las víctimas?</p> <p>Autor: Fonseca Paula y Escobar José</p> <p>Ubicación: Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Políticas</p> <p>Documento: Tesis para optar por el título de Politólogo</p> <p>Clasificación: 362.88 F557MF Año: 2006</p>	<p>A través de seguimiento de prensa a 10 periódicos nacionales, se evidencia el papel secundario de las víctimas en relación con la formulación y aplicación de la ley.</p>
<p>Título: Ley de Justicia Paz y Reparación Vs. Derecho Internacional y Análisis Comparativo en el Proceso de Paz en la Ex Yugoslavia</p> <p>Autor: Maribel del Valle Mesa</p> <p>Ubicación: Facultad de Derecho</p> <p>Documento: Tesis para optar el título de Abogado.</p> <p>Clasificación: 345.0508694 D248 Año: 2006</p>	<p>Analiza los alcances de la ley y su relación con el Derecho Internacional Humanitario, del mismo modo compara el éxito de la política de reinserción de la ex Yugoslavia.</p>
<p>Título: Ley de Justicia y Paz: ¿Instrumento de Reconciliación Nacional o Manifestación Institucional de la impunidad?</p> <p>Autor: Gardeazábal Rodríguez, Juan Carlos</p> <p>Documento: Tesis para optar título de Abogado.</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad de los Andes. Facultad de Derecho</p> <p>Clasificación: XX(287898.1) Año: 2007</p>	<p>La ley como expresión de la justicia restaurativa, enfatiza en las víctimas, sin embargo esta misma se desvirtúa al permitir por vía de la aplicación de principios del derecho penal beneficios que parecen excesivos frente a los crímenes atroces cometidos.</p>
<p>Título: Las mujeres como sujetos activos: Una aproximación desde el conflicto armado colombiano.</p> <p>Autor: Natalia Herrera Echeverri</p> <p>Documento: Tesis</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad de los Andes. Facultad de ciencias sociales. Departamento de ciencia política. Año: 2007</p>	<p>Explora el rol que desempeña la mujer en contextos de violencia y conflicto, observando la manera como ella, específicamente la mujer guerrillera perteneciente a las FARC e inmersa en el conflicto colombiano, piensa, vive y siente en el conflicto.</p>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PERFIL DEL TEXTO	APORTE A LA INVESTIGACIÓN
<p>Título: Verdad Justicia y Reparación</p> <p>Autor: RINCÓN, Álvaro.</p> <p>Documento: Trabajo de Grado en especialización</p> <p>Ubicación: Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional</p> <p>Clasificación: 6.9 R579v Año: 2005</p>	<p>Señala que en un verdadero proceso de paz que busque verdaderamente la reconciliación requiere la participación del pueblo, en la elaboración del proyecto de ley para que responda a la necesidad político- social y presente una solución al problema.</p>
<p>Título: El derecho de las victimas de violaciones graves a los derechos humanos; comisión de la verdad un reto para Colombia.</p> <p>Autor: PINEDA, Yelema Isabel.</p> <p>Documento: Monografía para optar el título de abogada</p> <p>Ubicación: Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional</p> <p>Clasificación: 6.1p649d Año: 2004</p>	<p>Menciona que el derecho de las victimas a la verdad, justicia y reparación ha sido acogido en el ámbito internacional, a través de figuras de justicia transicional. Evidencia el surgimiento de los Derechos Humanos y las Comisiones que han existido en Latinoamérica y Colombia.</p>
<p>Título: Paramilitarismo, Negociación bajo los ejes de la verdad, reparación y justicia</p> <p>Autor: CARRANZA, Luis Alberto</p> <p>Documento: Trabajo de grado para optar el título de Especialista en instituciones Jurídico Penales.</p> <p>Ubicación: Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional</p> <p>Clasificación: 6.9/C312p Año: 2005</p>	<p>Señala el surgimiento de grupos al margen de la ley y su responsabilidad de múltiples crímenes de lesa humanidad.</p> <p>Analiza proyectos de ley previos al proyecto de ley justicia y paz y los debates parlamentarios.</p>

ANEXO B
REVISION DOCUMENTAL 2005 – 2007

PERFIL DEL TEXTO	APORTE A LA INVESTIGACIÓN
------------------	---------------------------

<p>Título: Compilación de Instrumentos Internacionales, doctrina y jurisprudencia. Justicia, verdad y reparación</p> <p>Autor: MARRERO, Danny. Fundación Social</p> <p>Documento: Libro</p> <p>Ubicación: Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional</p> <p>Clasificación: 323.4 f981j 21 Año: 2005</p>	<p>Describe tratados, convenios internacionales, referidos a los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal.</p>
<p>Título: Verdad, justicia y reparación. Colombia ante la corte interamericana de Derechos Humanos.</p> <p>Autor: Gómez Méndez María Paula. Montoya Salamanca Alexandra.</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad del Rosario.</p> <p>Documento: Libro</p> <p>Clasificación: 341.66G633v Ej. 2 Año: 2006</p>	<p>Introducción al funcionamiento de sistema interamericano de D.H. y a la responsabilidad estatal por violación de los mismos, además aspectos relevantes de los fallos proferidos por la corte IDH contra Colombia.</p>
<p>Título: Asistencia estatal a los desplazados y Reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.</p> <p>Autor: LÓPEZ MURCIA JULIÁN DANIEL Y ACOSTA LÓPEZ JUANA INÉS</p> <p>Ubicación: Hemeroteca Universidad Javeriana.</p> <p>Documento: Artículo de revista en: International Law: Revista Colombiana de Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 8: 161-194, junio-noviembre de 2006 Año: 2006</p>	<p>Reconoce la reparación como principio base del derecho internacional de los derechos humanos y explica los criterios de la Corte Interamericana en materia de reparaciones y su relación con el tipo de daño.</p>
<p>Título: La ley de justicia y paz No es un instrumento para esclarecer el genocidio contra la Unión Patriótica</p> <p>Autor: Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar)</p> <p>Documento: libro</p> <p>Ubicación: Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional</p> <p>Clasificación: 345.05086/C822l Año: 2006</p>	<p>Presenta falencias de la Ley 975, en relación con el caso del genocidio contra el movimiento político Unión patriótica.</p>
<p>Título: Los paramilitares y lo no negociable, las emociones y los límites de la racionalidad.</p> <p>Autor: ARANGO, Rodolfo Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales Universidad Nacional</p>	<p>Describe características en el manejo de negociación entre el Estado y los paramilitares, desde la Ley 975 de 2005, pues señala que faltan</p>

Ubicación: Hemeroteca Universidad Nacional de Colombia. Documento: Revista Análisis Político- No. 56 Año: Enero – Abril 2006	las condiciones para conocer la verdad.
Título: Combatientes desmovilizados Autor: THEIDON, Kimberly. BETANCUR Paola. Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales Universidad Nacional Ubicación: Hemeroteca Universidad Nacional de Colombia. Documento: Revista Análisis Político- No. 58 Año: Septiembre – Diciembre 2006	Señala que en Colombia no serán suficientes las desmovilizaciones televisivas con sus aspectos espectaculares, tampoco el resultado del número de desmovilizados individuales.
Título: Trámite de la ley de justicia y paz Autor: Palau van Hissenhoven, Nicolás. Fundación Social Documento: libro Ubicación: Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Nacional Clasificación: 345.05 P154t 21 Año: 2006	Realiza una descripción del proceso legislativo de la ley desde que fue presentada como proyecto en el 2003 y sancionada en el 2005.
Título: Verdad Justicia y Reparación conversatorio de actores sociales Autor: Instituto Interamericano de Derechos Humanos Documento: libro Ubicación: Defensoría del pueblo. Año: 2006	Diferentes actores expresan sus opiniones con respecto a la ley; hacen un recorrido por las diferentes etapas, avances beneficios falencias que son evidentes.
Título: Hacia una reflexión ética del conflicto Colombiano: buscando la “verdad” Autor: Jácome Jorge González Ubicación: Hemeroteca Universidad Javeriana. Documento: Artículo de revista en: Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 113: 45-69, enero-junio de 2007. Año: 2007	Señala y critica la estructura y forma de reparar a las víctimas de los daños, desde la perspectiva clásica del individualismo liberal.
Título: El estado actual de las víctimas en Colombia: la búsqueda de la verdad. Autor: Roldán Valencia Ismael Ubicación: Hemeroteca Universidad Javeriana. Documento: Artículo de revista en: Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol. XXXVI / No. 1 Año: 2007	Concluye a través de una revisión de testimonios, que en Colombia las víctimas han tenido escasa visibilidad y participación en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones respecto a sus derechos fundamentales. Así mismo considera que la Ley 975 representa la posibilidad real de elaborar un duelo colectivo.

<p>Título: Mujer y conflicto armado.</p> <p>Autor: FIGUEROA Paola y PARDO Belén</p> <p>Documento: Informe sobre violencia, sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia.</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad de La Salle</p> <p>Clasificación: 362.76 Ej. 1 R. 169393 Año: 2005</p>	<p>Muestra de manera reiterada lo que significa para las mujeres convivir con actores armados presentes en las comunidades, Fuerzas Armadas que Militarizan algunas zonas, paramilitares que se han insertado en las comunidades y están legitimando su presencia en las mismas, o grupos guerrilleros que mantienen control sobre las mismas.</p>
<p>Título: La reparación in natura del daño</p> <p>Autor: Pontificia Universidad Javeriana</p> <p>Documento: Revista Vniversitas No 109</p> <p>Ubicación: Hemeroteca Universidad Externado de Colombia Año: 2005</p>	<p>Analiza el fenómeno con fundamento en la consideración del daño como hecho o acto ilícito civil, del cual, entre otros efectos jurídicos.</p>
<p>Título: Una mirada hacia delante: Elementos para la reparación colectiva en Colombia.</p> <p>Autor: Fundación Social – Fundación Honrad Adenauer</p> <p>Documento: Libro</p> <p>Ubicación: Biblioteca Universidad de La Salle.</p> <p>Clasificación: 347.077 F981u 1ed. Ej. 3 R.180778 Año: 2006</p>	<p>Presenta las generalidades del derecho a la reparación, con base en instrumentos de derecho internacional, se define la titularidad del derecho a la reparación, con base en instrumentos de derecho internacional, los mecanismos para hacerlos efectivo y los criterios para hacer exigible al Estado el cumplimiento de la obligación de reparar.</p>
<p>Título: Los estándares sobre reparación a las víctimas: Un límite normativo en la configuración y aplicación en medidas alternativas a la prisión.</p> <p>Autor: Corte constitucional y Corte Suprema de Justicia</p> <p>Documento: Revista Facetas Penales 59</p> <p>Ubicación: Hemeroteca Universidad Externado de Colombia. Año: 2007</p>	<p>Define el derecho a la, destacando las notas fundamentales que lo caracterizan en el estado actual del derecho internacional de los derechos humanos su importancia en la dignificación de las víctimas.</p>

ANEXO C
PRINCIPIOS DEL DERECHO A OBTENER REPARACIÓN GARANTÍA DE QUE NO
SE REPITAN LAS VIOLACIONES

PRINCIPIO	CONTENIDO
Principio 31. Derechos y deberes dimanantes de la obligatoriedad de reparar.	Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho ala víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.
Principio 32. Procedimientos de reparación	Tanto por la vía penal como por la vía civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el principio 23. en el ejercicio de dicho recurso, debe beneficiarse de una protección contra actos de intimidación y represalias. También puede proporcionarse reparaciones mediante programas, basados en medidas legislativas o administrativas, financiados por fuentes nacionales o internacionales, dirigidos a individuos y a comunidades. Las víctimas y otros sectores de la sociedad civil deben desempeñar un papel significativo en la elaboración y aplicación de tales programas.
Principio 33. Publicidad de los procesamientos de reparación	Los procedimientos especiales que permiten a las víctimas ejercer su derecho a una reparación serán objeto de la más amplia publicidad posible, incluso por los medios de comunicación privados. Se deberá asegurar esa difusión tanto en el interior del país como en el extranjero, incluso por la vía consular, especialmente en los países a los que hayan debido exiliarse muchas víctimas.
Principio 34 ambiente de aplicación del derecho a obtener reparación	El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos lo daños u perjuicios sufridos por las víctimas comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional. En los casos de desapariciones forzadas, la familia de la víctima directa tiene el derecho imprescriptible a se informado del a suerte y o paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido la identidad de los autores o se los haya encausado.

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN DE LAS VIOLACIONES

PRINCIPIO	CONTENIDO
Principio 35 principios generales.	<p>El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para que la víctimas no puedan volver a ser objeto de violaciones de sus derechos. con ese fin, los Estado deben comprender reforma institucionales y otras medidas necesarias para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura respecto de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Para el logro de esos objetivos es esencial la adecuada representación de las mujeres de los grupos minoritarios en las instituciones públicas. las reformas institucionales encaminadas prevenir una repetición de las violaciones debe establecerse mediante un proceso de amplias consultas públicas, incluida la participación de las víctimas y otros sectores de la sociedad civil. Tales reformas deben promover los siguientes objetivos:</p> <p>a) adhesión consecuente de las instituciones públicas al imperio de la ley.</p> <p>b) Derogación de las leyes que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos y o del derecho humanitario o que autoricen tales violaciones y la promulgación de leyes y otras medidas necesarias para asegurar el respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario, incluidas mediante que salvaguarden las instituciones y los procesos democráticos.</p>

	<p>C) El control civil de las fuerzas militares y de seguridad y de los servicios de inteligencia y el desmantelamiento de las fuerzas armadas paraestatales.</p> <p>D) La reintegración a la sociedad de los niños que hayan participado en conflictos armados.</p>
<p>Principio 36. Reforma de las instituciones estatales.</p>	<p>Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, incluidas reformas legislativas y administrativas, para procurar que las instituciones públicas se organicen de manera de asegurar el respeto por el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Como mínimo, los Estados deben comprender las siguientes medidas:</p> <p>a) Los funcionarios públicos y empleados que sean personalmente responsables de violaciones graves de los derechos humanos, en particular, los que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial, no deben continuar al servicio de las instituciones del Estado. Su destitución se realizará de acuerdo con los requisitos del debido procesos y el principio de no discriminación. las personas acusadas oficialmente de ser responsables de delitos graves al derecho internacional serán suspendidas de sus deberes oficiales durante las actuaciones penales o disciplinarias.</p> <p>b) Con respecto al poder judicial, los Estados deben comprender todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento independiente, imparcial y eficaz de los tribunales de conformidad con las normas internacionales relativas a las garantías procesales debidas. El derecho de hábeas corpus, sea cual sea fuere el nombre por el que se le conoce, debe considerarse un derecho no delegable.</p> <p>c) Debe garantizarse el control civil de las fuerzas militares y de seguridad,, así como de los organismos de inteligencia y, en caos necesario, ese control debe establecerse o restaurarse. con ese fin, los Estados deben establecer instituciones eficaces de supervisión civil de las fuerzas militares y de seguridad y de los organismos de inteligencia , incluidos órganos de supervisión legislativa.</p> <p>d) deben establecerse procedimientos de denuncia civil y debe garantizarse su eficaz funcionamiento.</p> <p>e) los funcionarios públicos y los empleados, en particular los que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial deben recibir capacitación amplia y permanente en materia de derechos humanos y, cuando procesa, en las normas del derecho humanitario y en la aplicación de esas normas.</p>
<p>Principio 37. Desmantelamiento de las fuerzas armadas paraestatales desmovilización y reintegración social de los niños.</p>	<p>Los grupos armados paraestatales o no oficiales serán desmovilizados y desmantelados, su posición en las instituciones del Estado o sus vínculos con ellas, incluidas en particular las fuerzas armadas, la policía , las fuerzas de inteligencia y de seguridad, deben investigarse a fondo y publicarse la información así adquirida. Los Estados deben establecer un plan de reconversión para garantizar la reintegración social de todos los miembros en tales grupos.</p> <p>Deben adoptarse medidas para asegurar la cooperación de terceros países que podrían haber contribuido a la creación y el fomento de tales grupos, en particular con apoyo financiero o logístico.</p> <p>Los niños que hayan sido reclutados o utilizados en las hostilidades serán desmovilizados o separados el servicio de otro modo. Cuando proceda, los Estados prestarán a esos niños toda la asistencia apropiada para su recuperación física y psicológica y su integración social.</p>
<p>Principio 38. Reforma de las leyes e instituciones que contribuyen a la impunidad.</p>	<p>Es menester derogar o abolir la legislación y las reglamentaciones e instituciones administrativas que contribuyan a las violaciones de derechos humanos o que las legitimen. En particular, es menester derogar o abolir las leyes o los tribunales de emergencia de todo tipo que infringen los derechos y libertades fundamentales garantizados en la Declaración Civiles y políticos. deben promulgarse las medidas legislativas necesarias para asegurar la protección de los derechos humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos democráticos.</p> <p>Como base de tales reformas, durante periodos de restauración o transición a la democracia y o a la paz los Estados deberán emprender un examen de su legislación y sus reglamentaciones administrativas.</p>

ANEXO D

MARCO LEGAL INTERNACIONAL

MARCO LEGAL INTERNACIONAL

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

<p>Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución (XXI), de 16 de diciembre de 1996</p>	<p>Entrada en vigor: 23 de Marzo de 1976 Entrada en vigor en Colombia: en virtud de la Ley 74 de 1968</p>
<p>Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.</p> <p>Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.</p> <p>Artículo 8 3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;</p> <p>Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.</p> <p>Artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.</p> <p>Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.</p> <p>Artículo 18. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.</p> <p>Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas</p>	
<p>Convención Americana sobre los Derechos Humanos Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969</p>	<p>Entrada en vigor: 18 de Julio de 1978 Entrada en vigor en Colombia: 18 de Julio de 1978 mediante Ley 16 de 1972</p>

Artículo 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

Artículo 6. 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluso.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Artículo 10. Derecho a Indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

<p>Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.</p>	
<p>Artículo 17. Protección a la Familia.1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.</p>	
<p>Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.</p>	
<p>Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.</p>	
<p>Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia.1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.</p>	
<p>Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes Adoptada por la Asamblea general en su Resolución 39/46 de 10 de Diciembre de 1984</p>	<p>Entrada en vigor: junio 26 de 1987 Entrada en vigor en Colombia: enero 8 de 1988 en virtud de la Ley 7 de 1986 http://www.pdhre.org/conventionsum/torsum-sp.html</p>
<p>Artículo 1.Se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.</p>	
<p>Artículo 2.Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otras índoles eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.</p>	
<p>Artículo 4. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal.</p>	
<p>Artículo 5. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos: Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado; Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado; Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.</p>	
<p>Artículo 10.Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.</p>	
<p>Artículo 12.Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.</p>	
<p>Artículo 13. Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.</p>	

Artículo 14. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

Artículo 16. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura.

Aprobada por la Asamblea General en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985

Entrada en vigor: Agosto 8 de 1991

Entrada en vigor en Colombia: Febrero 19 de 1999 en virtud de la Ley 409 de 1997

Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 4. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 5. No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.

Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 7. Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Artículo 9. Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente.

Artículo 10. Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

Artículo 11. Los Estados partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internacionales en esta materia.

Artículo 12. Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos:

a. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción; b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o c. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.

Artículo 13. Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de tortura. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido. Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

Artículo 14. Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.

Artículo 15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados partes en materia de extradición

**Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas**
Adoptada por la Asamblea General en Belém do
Para, Baril, el 9 de junio de 1994

Entrada en vigor: Marzo 28 de 1996
Entrada en vigor en Colombia: mayo 12 de 2005, en virtud
de la Ley 707 de 2001

Artículo I. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.

Artículo II. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

<p>Artículo III. Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad.</p> <p>Artículo V. La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición.</p> <p>Artículo IX. Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.</p> <p>Artículo X. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas.</p> <p>Artículo XI. Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.</p>	
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	
<p>Convenios de ginebra (artículos comunes) aprobados por la conferencia Diplomática para elaborar Convenio Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra el 12 de Agosto de 1949.</p>	<p>Entrada en vigor: Octubre 21 de 1950 Entrada en vigor en Colombia: Mayo 8 de 1962 en virtud de la Ley 5 de 1960</p>
<p>Título I: Disposiciones generales</p> <p>Artículo 3</p> <p>En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:</p> <p>1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.</p> <p>A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.</p> <p>Artículo 4. El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas.</p> <p>Título II: Protección general de la población contra ciertos efectos de la guerra</p> <p>Artículo 16. Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encintas, serán objeto de protección y de respeto particulares.</p> <p>Artículo 18. En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; deberán ser siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto.</p> <p>Título IV Aplicación del Convenio</p> <p>Artículo 146. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas</p>	

para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio.

Artículo 147. Las infracciones graves son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales (Protocolo I) Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el desarrollo de Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados.

Entrada en vigor: Diciembre 7 de 1978

Entrada en vigor en Colombia: Marzo 1 de 1994 en virtud de la no improbación otorgada por la Comisión Especial Legislativa el 4 de Septiembre de 1991

Sección III -- Personas desaparecidas y fallecidas

Artículo 33: Desaparecidos. 1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya señalado una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate. 2. Con objeto de facilitar la obtención de información de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, con respecto a las personas que no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los Convenios o del presente Protocolo: a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio la información sobre tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio durante más de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación o hubieran fallecido durante un periodo de detención; b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación. 3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de conformidad con el párrafo 1, y las solicitudes de dicha información serán transmitidas directamente o por conducto de la Potencia protectora, de la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando la información no sea transmitida por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto velará por que tal información sea también facilitada a esa Agencia. 4. Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan que grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en las zonas de campo de batalla; esas disposiciones podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompañados de personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente a tales misiones.

Artículo 34: Restos de las personas fallecidas. 1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o mientras se hallaban detenidas por causa de la ocupación o de las hostilidades, y los de las personas que no fueren nacionales del país en que hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las sepulturas de todas esas personas serán respetadas, conservadas y marcadas según lo previsto en el artículo 130 del IV Convenio, en tanto que tales restos y sepulturas no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los Convenios y del presente Protocolo. 2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes adversas lo permitan, las Altas Partes contratantes en cuyos territorios se encuentren las tumbas y, en su caso, otros lugares donde se hallen los restos de las personas fallecidas como consecuencia de las hostilidades, durante la ocupación o mientras se hallaban detenidas, celebrarán acuerdos a fin de:

a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los representantes de los servicios oficiales de registro de tumbas el acceso a las sepulturas, y determinar las disposiciones de orden práctico para tal

acceso; b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas.

Título III: Métodos y medios de guerra -- Estatuto de combatiente y de prisionero de guerra

Sección I -- Métodos y medios de guerra

Artículo 35: Normas fundamentales. 2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. 3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

Artículo 36: Armas nuevas. Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante.

Sección II - Estatuto de combatiente y de prisionero de guerra

Artículo 43: Fuerzas armadas. 1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, interalia, las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. 2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades. 3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto.

Artículo 44: Combatientes y prisioneros de guerra. 1. Todo combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que caiga en poder de una Parte adversa será prisionero de guerra. 3. Con objeto de promover la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades, los combatientes están obligados a distinguirse de la población civil en el curso de un ataque o de una operación militar preparatoria de un ataque. Sin embargo, dado que en los conflictos armados hay situaciones en las que, debido a la índole de las hostilidades, un combatiente armado no puede distinguirse de la población civil, dicho combatiente conservará su estatuto de tal siempre que, en esas circunstancias, lleve sus armas abiertamente: a) durante todo enfrentamiento militar; y b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras está tomando parte en un despliegue militar previo al lanzamiento de un ataque en el que va a participar. 8. Además de las categorías de personas mencionadas en el artículo 13 de los Convenios I y II, todos los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en un conflicto, tal como se definen en el artículo 43 del presente Protocolo, tendrán derecho a la protección concedida en virtud de esos Convenios si están heridos o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son náufragos en el mar o en otras aguas.

Título IV: Población civil. Sección I: Protección general contra los efectos de las hostilidades

Capítulo I: Norma fundamental y ámbito de aplicación.

Artículo 48: Norma fundamental. A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.

Artículo 51: Protección de la población civil. 1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, además de las otras normas aplicables de derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes. 2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 4. Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados: a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o c) los que emplean métodos o medios

de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo; y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil. 5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque: a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil; b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. 6. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles. 7. La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares. 8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en conflicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles, incluida la obligación de adoptar las medidas de precaución previstas en el artículo 57.

Capítulo III: Bienes de carácter civil

Artículo 52: Protección general de los bienes de carácter civil. 1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del párrafo 2. 3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción milita, se presumirá que no se utiliza con tal fin.

Artículo 53: Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto. Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido: a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar; c) hacer objeto de represalias a tales bienes.

Artículo 54: Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. 1. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles. 2. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito. 3. Las prohibiciones establecidas en el párrafo 2 no se aplicarán a los bienes en él mencionados cuando una Parte adversa: a) utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas; o b) los utilice en apoyo directo de una acción militar, a condición, no obstante, de que en ningún caso se tomen contra tales bienes medidas cuyo resultado previsible sea dejar tan desprovista de víveres o de agua a la población civil que ésta se vea reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse. 4. Estos bienes no serán objeto de represalias. 5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en conflicto supone la defensa de su territorio nacional contra la invasión, una Parte en conflicto podrá dejar de observar las prohibiciones señaladas en el párrafo 2 dentro de ese territorio que se encuentre bajo su control cuando lo exija una necesidad militar imperiosa.

Artículo 55: Protección del medio ambiente natural

1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población. 2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias.

Capítulo V: Localidades y zonas bajo protección especial

Artículo 59: Localidades no defendidas. 1. Queda prohibido a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio que sea, localidades no defendidas. Artículo 65: Cesación de la protección civil. La protección a la cual tienen derecho los organismos civiles de protección civil, su personal, edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si cometen o son utilizados para cometer, al margen de sus legítimas tareas, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.

Capítulo II: Medidas en favor de las mujeres y de los niños

Artículo 76: Protección de las mujeres. 1. las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor. 2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de las mujeres encinta y de madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, detenidas o internadas por razones relacionadas con el conflicto armado. 3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar la imposición de la pena de muerte a las mujeres encinta o a las madres con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales delitos.

Artículo 77: Protección de los niños. 1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón. 2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de quince años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de quince años pero menores de dieciocho años, las Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad. 3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, participaran directamente en las hostilidades niños menores de quince años y cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra. 4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75. 5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años.

Protocolo Adicional a los Convenio de Ginebra relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)

Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados.

Entrada en vigor: Diciembre 7 de 1978

Entrada en vigor en Colombia: Febrero 15 de 1996 en virtud de la Ley 171 de 1994

TÍTULO II: TRATO HUMANO

Artículo 4: Garantías fundamentales. 1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. 2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1: a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; b) los castigos colectivos; c) la toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; g) el pillaje; h) las amenazas de realizar los actos mencionados

TÍTULO IV: POBLACION CIVIL

Artículo 13: Protección de la población civil. 1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes. 2. No serán objeto de ataque la población civil

<p>como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.</p> <p>Artículo 14. Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego.</p> <p>Artículo 15. Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil.</p> <p>Artículo 16. Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto. Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar.</p> <p>Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto</p>	
DERECHO PENAL INTERNACIONAL	
<p>Convención para la prevención y la sanción del delito de Genocidio.</p> <p>Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 260 A (III) el 9 de diciembre de 1948.</p>	<p>Entrada en vigor: 1 de Diciembre de 1951</p> <p>Entrada en vigor en Colombia: enero 27 de 1960 en virtud de la Ley 20 de 1959.</p>
<p>(i) Artículo II. En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.</p> <p>(ii) Artículo III. Serán castigados los actos siguientes: a) El genocidio; b) La asociación para cometer genocidio; c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio.</p> <p>Artículo VI. Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.</p>	
<p>Estatuto de la Corte Penal Internacional</p> <p>Adoptada por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de julio de 1998.</p>	<p>Entrada en vigor: julio 1 de 2002</p> <p>Entrada en vigor para Colombia: 01 noviembre de 2002 en virtud de la ley 742 de 2002</p>
<p>Artículo 5 Crímenes de la competencia de la Corte</p> <p>1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad</p>	

internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión.

Artículo 6 Genocidio. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad.

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Artículo 8. Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: i) Matar intencionalmente; ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente; v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga; vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial; vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales; viii) Tomar rehenes;

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea; v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares; vi.) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción; vi) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves; viii) El traslado, directa o indirectamente, por

la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares; x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; xii) Declarar que no se dará cuartel; xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; xiv) Declarar abolición, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra; xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto; xvii) Veneno o armas envenenadas; xviii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo; xix) Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones; xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes; xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra; xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares; xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; xxv) Provocar intencionalmente la inanición de la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra; xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa:

i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal,

instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados; iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares; v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas; ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo; x) Declarar que no se dará cuartel; xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.

3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

PARTE VI. DEL JUICIO

Artículo 68 .Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos.

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecidas en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. 5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o información y presentar en cambio un resumen de éstas.

Artículo 75. Reparación a las víctimas. 1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda. 2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. 6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.

ANEXO E

MARCO LEGAL NACIONAL

MARCO LEGAL NACIONAL

Constitución Política de Colombia	
<p>Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.</p> <p>Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.</p> <p>El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados</p>	
LEY 171 DE 1994	(Diciembre 16) Diario Oficial No. 41.640, de 20 de diciembre de 1994 http://www.secretariasenado.gov.co
<p>Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)", hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977.</p> <p>Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental,</p> <p>Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales conflictos armados,</p> <p>Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.</p>	
LEY 248 DE 1995	(Diciembre 29) Diario Oficial No. 42.171., de 29 de diciembre de 1995
<p>Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.</p> <p>Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.</p> <p>Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.</p>	
LEY 387 DE 1997	(julio 18) Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997
<p>Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.</p> <p>Artículo 10.</p> <p>7. Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.</p> <p>8. Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno a sus territorios</p>	
LEY 975 DE 2005	(julio 25) Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005
<p>Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.</p> <p>Artículo 8</p> <p>DERECHO A LA REPARACIÓN.</p>	

El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.
Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.
La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.
ARTÍCULO 41. ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECIALES. Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.

ANEXO F
RESEÑA ANALÍTICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y REPARACIÓN INTEGRAL
(RAVGRI).

NÚMERO RAVGRI	FECHA ELABORACIÓN			ELABORADO POR
	DÍA	MES	AÑO	
1. PERFIL DEL DOCUMENTO				
1.1 TIPO DE DOCUMENTO		1.2 TIPO DE PRESENTACIÓN		1.3 NIVEL DE CIRCULACIÓN

Libro		Imprenta		General	
Trabajo de Grado		Digital		Restringida	
Informe		Otro			
Artículo de revista		Cual			
Boletín					
2. REFERENCIA DEL DOCUMENTO					
2.1 TÍTULO					
2.2 SUBTÍTULO					
2.3 AUTOR (A)					
2.4 AUTOR CORPORATIVO					
2.5 EDITORIAL					
2.6 EDICIÓN - AÑO					
2.7 PAÍS - CIUDAD					
2.8 LUGAR UBICACION					
3. APOORTE A LA INVESTIGACIÓN					
3.1 PALABRAS CLAVES					
3.2 DESCRIPCION					
3.3 CONCLUSIONES					
3.4 OBSERVACIONES					
3.5 BIBLIOGRAFÍA					

ANEXO G

INSTRUCTIVO RESUMEN ANALÍTICO VIOLENCIA DE GÉNERO Y REPARACIÓN INTEGRAL (RAVGRI)

NÚMERO DE RAVGRI: Corresponde a la numeración del inventario bibliográfico acumulado por el grupo investigador.

FECHA ELABORACIÓN: Indica el momento en el que se elaboró el RAVGRI.

ELABORADO POR: Nombres y Apellidos de la investigadora que implementó el instrumento.

1. PERFIL DEL DOCUMENTO

1.1 Tipo de documento: Se marca con una X la siguiente clasificación:

Libro: es un texto impreso, encuadernado y publicado. En el que se presenta el contenido total de un tema específico.

Trabajo de grado: es una investigación publicada y realizada en programas de pregrado y postgrado de Unidades Académicas de Bogotá D.C.

Informe: es una publicación detallada resultado de un proceso de investigación realizada por una Organización No Gubernamental, Organización Gubernamental.

Artículos de revista: es un escrito informativo y breve, publicado en una revista especializada.

Boletín: Es un documento que se publica periódicamente y que se clasifica como tal por sus autores.

1.2 Tipo de presentación: Hace referencia a las características de presentación del texto (impresa, digital).

1.3 Nivel de circulación: Indica el tipo de acceso que se tuvo al documento.

2. UBICACION DEL DOCUMENTO

2.1 Lugar: Corresponde al sitio de ubicación del documento, para el caso particular hace referencia a las bibliotecas de universidades o instituciones en el se encontró el documento. Para el caso de los artículos Web se refiere a la dirección, vínculo o link de Internet a través del cual se tiene acceso al documento.

2.2 Clasificación: Se refiere al ordenamiento particular que cada lugar en el que se encontró el documento le dio al mismo.

3. REFERENCIA DEL DOCUMENTO

3.1 Nombre del autor/a: Nombre (s) y apellidos completos de la persona que aparece responsable de la producción de conocimiento de un texto.

3.2 Autor corporativo: Se refiere a la razón social de las instituciones gubernamentales, académicas, y ONGs, que elaboraron el documento.

3.3 Título: Denominación o nombre del documento, se debe transcribir de la forma como aparece en el texto.

3.4 Subtítulo: Denominación o nombre que complementa o amplía el título del texto; en algunos casos se refiere al capítulo del libro que fue seleccionado por el equipo investigador.

3.5 Editorial: Corresponde a la institución o entidad que edito el documento. Para el caso particular puede ser una Universidad ó Organización Gubernamental o no Gubernamental.

3.6 Edición: Indica el número de edición del documento. Ejemplo: 1 ED, 2 ED ó 3 ED.

3.7 Año: Fecha de Publicación del documento.

3.8 País: Nación de origen en donde se edito el documento.

3.9 Ciudad: Lugar particular en donde se edito el libro.

4. APOORTE A LA INVESTIGACIÓN

4.1 Palabras claves: Son las palabras especializadas que se refieren al contenido del texto original y a sus ideas centrales, (máximo cinco palabras).

4.2 Descripción: Se refiere a la idea principal que se desarrolla en el texto.

4.3 Conclusiones: Argumento final al que llega el autor respecto al tema desarrollado; para este caso debe estar explícito en el documento y debe ser transcrito al RADRPG.

NÚMERO FTVGRI	FECHA DE ELABORACIÓN	ELABORADO POR
---------------	----------------------	---------------

4.4

Re
co
m
en
da
ci
on
es
:
Su
ge
re

ncias realizadas por el autor; para este caso debe estar explícito en el documento.

4.5 Bibliografía: Se refiere a la bibliografía citada por el autor y que sea pertinente para la investigación, es decir que posteriormente pueda ser consultada por el equipo investigador.

4.6 Observaciones: son aquellos aspectos relevantes que brinda el documento, y que no se han tenido en cuenta al momento de elaborar las categorías de análisis.

		DÍA	MES	AÑO	
1. REFERENCIA DEL DOCUMENTO					
1.1 TITULO					
1.2 SUBTITULO					
1.3AUTOR					
1.4 AUTOR CORPORATIVO					
2. APOORTE A LA INVESTIGACIÓN					
2.1 PERSPECTIVA DE GENERO	¿Cuáles son las características socio demográficos de los de las mujeres víctimas?				
	¿Cuáles son las manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres?				
	¿Cuáles son los actores que ejercen violencia de género en contra de las mujeres víctimas del conflicto armado?				
2.2 DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL	¿Cómo influyen las manifestaciones de violencia género en las relaciones individuales, familiares y comunitarias?				
	¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por parte del Estado Colombiano frente a la reparación integral?				
	¿Cuál es el significado de reparación integral que tienen las mujeres victimas del Conflicto armado colombiano?				
Desde los testimonios y relatos escritos, ¿Qué consideraciones tienen las mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado y las instituciones de la reparación integral efectuada por el Estado?					
3. OBSERVACIONES					

ANEXO I
INSTRUCTIVO FICHA TEMÁTICA VIOLENCIA DE GÉNERO Y REPARACIÓN INTEGRAL
(FTVGRI)

Objetivo: Complementar la información adquirida en los RARIPG (Resumen analítico del derecho a la reparación integral desde la perspectiva de género).

Número de la ficha: consecutivo que se le ha asignado a las fichas elaboradas.

1. Identificación: Hace referencia a los datos básicos del documento (autor, título del texto).

2. Aporte a la investigación: hace referencia a las categorías que permitirán realizar el análisis de la investigación, es constituido por:

Categoría (se refiere a las categorías de análisis que surgieron a partir del marco teórico), cita textual y página (campo en el que se transcribe textualmente los aportes del documento a la investigación; también se escribe la página en la que se encuentra la cita), reflexión (interpretación, aclaración o comentarios de la cita realizada por la investigadora en relación con el tema).

2.1 Perspectiva de género

2.1.1 ¿Cuáles son las características socio demográficas de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano?

Hace referencia a la ocupación, ciclo vital, edad, escolaridad, procedencia, estado civil, educación, y todos aquellos componentes que contribuyan al análisis integral de la investigación.

2.1.2 ¿Cuáles son las manifestaciones de violencia de género que afectan a las mujeres?

Las manifestaciones de violencia de género se clasifican en tres tipos:

Violencia sexual: acceso carnal violento, prostitución forzada, embarazo y aborto forzado, manoseo, chantajes sexuales, desnudez forzada, mutilación sexual, anticoncepción forzada, esclavitud sexual, entre otros

Psicológico: Amenazas manipulación, presión, humillaciones públicas, hostigamiento, señalamiento, persecuciones, intimidación, sometimiento, coerción, entre otros.

Físicas: Desapariciones forzosas, asesinatos, efectos permanentes en los cuerpos de las mujeres, detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas, agresiones físicas, mutilación, confinamiento, entre otros.

2.1.3 ¿Cuáles son los actores que ejercen violencia de género en contra de las mujeres víctimas del conflicto armado?

Se mencionan los principales actores armados que cometen actos violentos.

2.1.4 ¿Cómo influyen las manifestaciones de violencia de género en las relaciones individuales, familiares y comunitarias de las mujeres víctimas del conflicto armado?

Nuevas formas de relacionamiento basadas en sentimientos de temor, confusión, desesperanza o empoderamiento. *Individuales:* autoconcepto (autopercepción física, talentos, habilidades, creencias (maternidad, femenino) o fe aspectos espirituales, desconfianza de nuevas relaciones *Familiares:* relaciones antes ó después de conflicto con su pareja, hijos, padres; incidencia en la vida íntima (sexual, expresiones de dolor, rabia, impotencia hacia ella misma y quienes la rodean). *Comunitarias:* rechazo, comentarios de vecinos, dificultad para integrarse en diferentes instituciones, desconfianza en el acceso a servicios brindados a raíz de su situación.

2.2 Derecho a la Reparación Integral

2.2.1 ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por parte del Estado colombiano frente a la reparación integral?

Descripción de las actuaciones de los organismos estatales en vía de una reparación integral. Ejemplo indemnizaciones (entrega de dinero, subsidios), restituciones (tierras, propiedades), rehabilitación (atención y seguimiento psico social), garantías de no repetición (actores armados no incurrir nuevamente en manifestaciones de violencia realizadas).

2.2.2 ¿Cuál es el significado de reparación integral que tienen las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano?

Se refiere al deber ser (lo ideal o utópico) de la reparación desde el punto de vista de las mujeres víctimas.

2.2.3 Desde los testimonios y relatos escritos ¿Qué consideraciones tienen las mujeres víctimas del conflicto armado y las instituciones frente a la reparación integral efectuada por el Estado?

Hace referencia a los debates y discusiones en torno a la formulación y desarrollo de la Ley, así como la posibilidad de las víctimas de acceder a los procesos de reparación.

3. Observaciones: hace referencia a todos los hallazgos relevantes que no se tuvieron en cuenta en el momento de la elaboración de la pregunta, sin embargo complementa la comprensión de la categoría.

Elaborado por: Nombres y Apellidos de la investigadora que implementó el instrumento.

Fecha de elaboración: Indica el momento en el que se elaboró la ficha Temática, iniciando por el día, mes y año.

ANEXO J

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO	
DETALLE	VALOR
PAPELERIA/ FOTOCOPIAS	\$ 80.000
INTERNET	\$ 300.000
IMPRESIONES	\$ 450.000
TRANSPORTE	\$ 540.000
ENCUADERNACIÓN TRABAJO	\$ 100.000
ALIMENTACIÓN	\$ 2.205.000
PARQUEADERO	\$ 248.000
TOTAL	\$ 3.923.000